**INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL DECRETO LEY N° 321, DE 1925, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LOS PENADOS.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# BOLETÍN N° 10.696-07-1

**HONORABLE CÁMARA:**

 La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, en Moción de los Honorables Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Larraín.

 Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “discusión inmediata” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de seis días para afinar su tramitación, término que venció el 18 de septiembre próximo pasado, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el 12 de septiembre.

 Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración de la señora Javiera Blanco, ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ignacio Suárez, subsecretario de Justicia, Gherman Welsch, Ignacio Castillo y Marcela Corvalán, asesores legislativos de ese ministerio.

Asistieron, asimismo, Francisco Geisse y Cristián Irarrázabal, asesores legislativos de la Defensoría Penal Pública, Ana María Morales, directora de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Julio Cortés, asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Héctor Mery, por la fundación Jaime Guzmán, el académico señor Enrique Aldunate.

**CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.**

 1) **La idea matriz o fundamental** del proyecto es sustituir el decreto ley Nº 321, de 1925, con el fin de regular el beneficio de la libertad condicional, y establecer que podrán acceder al mismo aquellas personas que estando privadas de libertad, cumplan con determinados requisitos y muestren un efectivo avance en el proceso de reinserción social.

 **2) Quórum de votación.**

 Cabe hacer presente que el H. Senado señaló que esta iniciativa se debe aprobar con quórum de ley simple pues, a pesar que algunas de sus disposiciones dicen relación con el Poder Judicial, ellas se refieren al ejercicio de atribuciones de carácter administrativo y no jurisdiccional. Este mismo criterio ya fue establecido por el Congreso Nacional, cuando se aprobó la ley N° 20.587, contenida en el Boletín N° 7.534-07, que modificó el decreto ley N° 321, de 1925, criterio compartido por vuestra Comisión.

Sin embargo, vuestra Comisión incorporó un artículo 6° nuevo, pasando el artículo 6° del texto propuesto por el Senado a ser 7°. El nuevo artículo 6° trata materias propias de ley orgánica constitucional, de conformidad a lo señalado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

 **3) Normas que requieren trámite de Hacienda.**

 De conformidad a lo establecido en el Nº 5 artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

 **4) Comunicación a la Corte Suprema de las disposiciones incorporadas en este trámite o que han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las ya conocidas por la Corte.**

 Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ofició a la Excma. Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, con el objeto de que se pronuncie respecto de esta iniciativa de ley, particularmente respecto del artículo 6° introducido en este trámite constitucional.

 Sin perjuicio de hacer presente que el H. Senado, mediante oficio N° 85, de fecha 16 de junio de 2016, consultó respecto del texto aprobado por esa Corporación.

 **5) El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.**

 En sesión 216ª, de fecha 13 de septiembre del 2016, se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes.

 Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don HUgo; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Saldívar, don Raúl; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

 **5) Se designó Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes.**

**I.- RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.**

Señalan sus autores, en el propio texto de la Moción, que el decreto ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados, que si bien ha sido objeto de modificaciones, mantiene en lo medular una concepción de la pena y del condenado propias de la época de su dictación, y que no contempla un enfoque de reinserción social.

Por otra parte, agregan, el Código Penal que data de 1874, ha sido objeto de importantes modificaciones, y que lo mismo sucede con normas relativas a las medidas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Lo que deja de manifiesto, a juicio de ellos, la necesidad de actualizarlo, recogiendo los avances de la criminología a lo largo del siglo XX y el XXI, armonizando así de mejor manera el sistema jurídico penal en su integridad.

Subrayan el hecho de que la libertad condicional es un beneficio que favorece la reinserción social a través del egreso anticipado y sujeto a la supervisión de la autoridad, para aquellos privados de libertad que han demostrado avances en su proceso de intervención para la reinserción social.

Acotan, además, que el Consejo para la Reforma Penitenciaria ha señalado en su informe de marzo de 2010, que resulta fundamental el fortalecimiento del sistema alternativo a la privación de libertad, así como también el favorecimiento de la reinserción social en los recintos penitenciarios, para lo cual el perfeccionamiento de la libertad condicional resulta esencial.

En tal sentido, a su juicio, y como señala expresamente la moción, es necesario materializar el principio de progresividad de la pena, recogiendo elementos y principios que han demostrado ser capaces de favorecer la reinserción social, entre otros en la entrega paulatina de mayores espacios de libertad y autonomía a las personas condenadas según sus avances en el proceso de intervención para la reinserción social.

Por otra parte, existe una necesidad de modificar la forma en la cual se supervisa a los sujetos que acceden al beneficio de libertad condicional, dado que la evidencia empírica ha demostrado que los programas de acompañamiento al egreso y de transición a la libertad disminuyen la reincidencia.

Cabe hacer presente que a juicio de los mocionantes, la libertad condicional no constituye un derecho, sino un beneficio que entrega el legislador como forma de alcanzar la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad.

**II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.**

 El proyecto de ley despachado por el Senado consta de un artículo único, que reemplaza el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados, por un texto compuesto por ocho artículos permanentes y uno transitorio.

El artículo 1° consigna en qué consiste la libertad condicional y sus efectos sobre la pena.

El artículo 2° establece los requisitos para acceder a la libertad condicional.

El artículo 3° establece mayores requisitos para postular a la libertad condicional a personas condenadas a penas que señala.

El artículo 4° se refiere a la Comisión de Libertad Condicional.

El artículo 5° trata la resolución que deberá dictar la Comisión de Libertad Condicional.

El artículo 6° hace referencia a la supervisión que ejercerá Gendarmería de Chile respecto de las personas en libertad condicional.

El artículo 7° trata la situación de las personas en libertad condicional que fuere condenada por delito o incumpliere su plan de intervención individual.

El artículo 8° se refiere a la posibilidad de acceder a la libertad completa de las personas en libertad condicional.

El artículo transitorio se refiere al reglamento que deberá dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

**III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.**

**1.- Discusión General.**

 El proyecto en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión 216ª de fecha 13 de septiembre de 2016, por la unanimidad de los diputados presentes.

 Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Saldívar, don Raúl; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se hace presente que durante el debate en general se tuvo, además, a la vista el proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados en materia de requisitos para su otorgamiento, originado en moción de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Farcas y Fuenzalida.

Durante la discusión general, se recibió la opinión del señor subsecretario de Justicia, quien señaló que este proyecto tiene por objeto modificar, para regular de mejor manera, el decreto ley 321, de 1925. Las comisiones de libertad otorgaron 2314 libertades condicionales en un semestre, cifra superior a cualquiera de los últimos cinco años. Por ejemplo, 795 libertades se otorgaron durante 2015. Esto generó un gran debate público debido al perfil de los internos beneficiados. Esto dio lugar a varias discusiones, los senadores presentaron un proyecto para regular de mejor manera el tema, se apoyó con algunas indicaciones por parte del Ejecutivo.

La libertad es un beneficio. Actualmente, la legislación lo contempla como un medio de prueba, acá es un beneficio a favor de los privados de libertad. Esto es bastante más moderno que lo propuesto en 1925. Por ello se agrega el informe de la comisión social, y el estar acogido a beneficios de salidas, y se agrega que el informe técnico dé cuenta de los aspectos de reincidencia del penado, regulando de mejor manera el contenido del informe, a la luz de la discusión pública habida en el país en el tema, agregando que la comisión técnica tendrá que tener presente el delito y el daño causado.

Esto dice relación con el principio de aplicación progresiva de la pena, sobre ir generando un mayor ámbito de autonomía en el penado.

En cuanto a los condenados por crímenes de genocidio, se dispone que se cumplan los dos tercios de la condena, y deben ya estar gozando de beneficios para optar a la libertad condicional.

En cuanto a la comisión de libertad, esta se ha constituido de manera variopinta, en general con los jueces a cargo de las visitas de cárceles, y ahora se dispone que deben ser cuatro jueces, y más en el caso de Santiago.

Sobre el control, es importar que se pasa de un control administrativo a un plan de acción individual en función del perfil del sujeto, se tiene que concurrir a control a lo menos una vez al mes, tendientes a ejercer control en el avance. Se dispone un plazo para informar los plazos en caso de incumplimiento, y un plazo para resolver.

El Ejecutivo reafirmó su compromiso en que el proyecto es valioso, otorga mayor seguridad a las personas, para tener mejores y mayores antecedentes, y es importante pues obliga al Ejecutivo a proponer un plan de intervención, con la finalidad de generar mayor certeza y seguridad. El Ejecutivo apoya este proyecto, y con la discusión en este foro democrático, se puede realizar las modificaciones que se estime pertinentes, teniendo presente que el próximo período de postulación se abre en octubre.

El asesor señor **Geisse[[1]](#footnote-1)** señaló que a pesar de la precariedad del sistema de ejecución de penas, la libertad condicional disminuye la reincidencia. Las cifras son claras, el informe de la Fundación Paz Ciudadana da cuenta que la reincidencia en el sistema chileno, los que egresan sin beneficios son superiores a los que sí obtuvieron, 58% vs 23,4%. Esto es refrendado por Gendarmería de Chile, los que egresan habiendo cumplido en total reinciden un 38,4%, vs 13% de quienes si obtuvieron beneficios. La libertad condicional cumple sus propósitos.

En términos generales, no hay en Chile un sistema de ejecución de las penas privativas de libertad que sea moderno y de acuerdo a las necesidades de dicha labor. El sistema de ejecución de penas es precario, al igual que el sistema de concesión de la libertad condicional. Si se observa lo ocurrido en los últimos meses, se ve patente la debilidad. El conjunto de los informes proviene de Gendarmería, no hay contraparte, no hay contradictorio, sólo es la opinión de ese servicio, y hay una comisión de libertad condicional que debe evaluar y decidir, y su labor es casi imposible pues debe decidir sobre centenares de causas, destinando poco tiempo a ello. En Valparaíso, si hubiera analizado el total de los antecedentes tenidos a la vista, habría destinado 70-90 segundos para conocer cada causa. En Chile no hay jueces de ejecución, lo son los de garantía, pero de modo incompleto.

La representante de **Paz Ciudadana[[2]](#footnote-2)** señaló que la libertad condicional se inserta dentro de un sistema de liberación temprana, y que en general, gran parte de la doctrina la concibe como parte del sistema progresivo, y ella es una forma distinta de cumplir la sanción, en tal sentido, la libertad condicional participa de la naturaleza de pena, con todas sus características.

En todos los países existe una regulación del tema, en general los países desarrollados hay sistemas de liberación automática, en Suecia cumplidos dos tercios de la pena se les libera, estos datos sirven para no asustarse, son cosas que ocurren en el derecho comparado. En Inglaterra y Gales también cuentan con sistemas automáticos.

Otros mecanismos son discrecionales, que suponen los *parole boards*, donde no operan automáticamente sino que se presentan antecedentes de postulación. La diferencia es que ellos elaboran sus propios informes, mientras en Chile los informes los entrega la institución penitenciaria, y ellos no están integrados por jueces, sino por personas con experiencia criminológica. En cuanto al carácter administrativo o jurisdiccional del resolutor, ejemplos modernos de ejecución son los jueces de ejecución de penas, que no dependen de los órganos administrativos.

En los países desarrollados, los *parole boards* hacen sus propias evaluaciones. Acá todos los insumos son generados por Gendarmería de Chile y así no se pueden contrastar tales informes. Allá se tiene delegados de libertad condicional, como los de libertad vigilada, hasta la total ejecución de la pena. Esa orientación la tiene el proyecto, pero no se crearon las figuras de los delegados. En la experiencia comparada, no todos los liberados requieren supervisión, en algunos casos basta un contacto telefónico, y otros requerirán contacto presencial cada semana, depende de cada caso.

La evidencia sobre libertad condicional, en los países comparados, es que es escasa, y no se despeja el criterio de selección. En todos los países son sujetos seleccionados, por lo que es difícil decir si la reinserción operó, pues los sujetos son seleccionados.

Sobre el uso de la libertad condicional en todos países, en Estados Unidos a vía ejemplar, país conocido por altas tasas de presidización, tiene un fuerte uso de la libertad condicional como mecanismo progresivo. Su sistema cerrado, cárcel, es de 34%, 56% es alternativo, y la libertad condicional es usada en un 13%. Mientras, en Chile, con las modificaciones de la ley 20.587, el 2002, que liberó a los Seremi de participar en la selección de los candidatos, estamos en un 3%, con los 3146 penados en libertad condicional. Así, estamos muy por debajo del uso internacional de este mecanismo.

De lleno en el proyecto, la libertad condicional es una norma antigua, disfuncional a la actualidad. Efectivamente, investigaciones han demostrado que los sujetos que egresan en libertad condicional muestran inferior reincidencia a los que cumplen íntegramente la pena, 58% vs. 23,5%. Sobre la oscilación de la libertad condicional, entre 2012 y 2014, a propósito de la ley 20.587, la libertad condicional sigue siendo una herramienta subutilizada.

Analizando la moción estimó que el proyecto tiene una inspiración adecuada de acoger los avances criminológicos, de contar con un diagnóstico de reinserción, y un seguimiento de aquellos a los que se les entrega la libertad condicional. Eran enfáticos en que era un proyecto bien inspirado y que recogía la evidencia criminológica, pero era problemático el requisito de haber sido beneficiado con un permiso de salida. Estimó que esa exigencia como requisito de procedencia es un requisito que debiese eliminarse.

Si el sujeto no tuviera un diagnóstico favorable no habría permiso de salida, y como se mencionó, Gendarmería ha tenido políticas cambiantes en el otorgamiento de los beneficios, depende mucho del alcaide. Un estudio de 2012 evaluó los consejos técnicos, órganos abocados al tema, y había dos problemas: uno, el cómo se evaluaba la conducta de los internos, y la segunda el cómo se estaba decidiendo sobre los permisos de salida.

Básicamente, depende del contacto del penado con el personal interno, con el personal de guardia, si tiene o no buena relación, eso basta para tener conducta La guardia interna ‘le tiene buena’, y contará como conducta, no hay procedimientos objetivos, no hay estándar, ni siquiera corresponde hablar de tribunal, solo son dos personas. Es cierto que el reglamento está modificándose, pero sigue siendo un problema.

Sobre cómo se otorgan los informes tenidos a la vista son sin idoneidad técnica, y nada asegura que el total de los penados pueda contar con un pronóstico favorable de reinserción. Como está configurado el consejo técnico, y en ello la reforma reglamentaria no innova, mucho depende del alcaide, por lo que los permisos son discrecionales, de él depende el otorgamiento de los permisos. Eso se constató en las visitas y se informó al ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

La cantidad de permisos que se otorga, si se condiciona para el otorgamiento de libertades, la cantidad estará vinculada. Actualmente, hay 1.088 personas en salida diaria, y 3.000 en libertad condicional. Si se condiciona, se reducirá a esa cifra, y el 3% quedará en algo menos de 1%. Ya hubo bastante constricción al otorgamiento de medidas alternativas a propósito de la agenda corta, y esto presiona aún más.

En la experiencia comparada no hay casos en que todas las herramientas se entreguen al órgano penitenciario, esta propuesta legal es única en el mundo al administrativizar la decisión. Las Comisiones de Libertad Condicional no tendrán nada que decidir, pues todo quedará en las decisiones del Consejo Técnico, será un núcleo muy reducido el que podrá decidir. Los Consejos Técnicos proponen, los jueces de ejecución al final deciden, o los *parole boards* elaboran sus propios informes, pero acá no tendrán espacios de decisión propia. Es cierto, no será toda la información, se podrá agregar información, pero el otorgar antes un permiso por Gendarmería para habilitar a la libertad, será un antecedente gravitante.

Recordó declaraciones del anterior director nacional de Gendarmería, relativo a que esa es una institución vulnerable, y básicamente lo que quiso reflejar es que los procedimientos administrativos eran frágiles y permeables, por lo que entregar los permisos de salida solo a Gendarmería, y que sea requisito para obtener la libertad, es un foco tentativo de corrupción tremendo, y eso es algo que debe tenerse presente.

En otros países, lo que hay son otras instancias para impugnar las decisiones de salida. Lo que hace el proyecto es otorgar omnímodamente la decisión a la administración, lo que es problemático y un error. El proyecto está bien inspirado, pero estas observaciones son necesarias de revisar, al igual que la propuesta de redacción al artículo 7°, en cuanto dispone como única alternativa el revocar la libertad, cuando podría proponerse, como otra opción adicional, el que se intensifique el plan de intervención, y así tener más herramientas para agravar la libertad condicional, no sólo revocarla.

El diputado señor **Farcas** señaló que al oír los argumentos, hay diferencias fundamentales. Colocar trabas y restricciones a la libertad condicional, luego de conocido el uso intensivo en algunas regiones, lo que se quiso fue colocarles restricciones. Cuando se hace valer el punto, es porque se está entregando a Gendarmería la facultad de entregar un listado depurado, con personas específicas determinadas como hábiles para la libertad condicional.

Al conocer los últimos actos delictuales en Maipú u otros lugares, cometidos por personas con brazaletes, cuestión que también debe ser revisada, la cuestión es dejar claro que hay dos miradas. Una que cree que la libertad condicional es un derecho, ello ocurre en algunas partes del mundo, pero algunos creen que no es una buena idea, pues colocando algunos requisitos, la libertad condicional ha colocado distancia con sus fines naturales. Una posibilidad es que podamos tener un instrumento que entregue una mejor probabilidad, y ahí hay un desafío, de que la persona tenga una mejor reinserción.

Si el tema a ser puesto en tela de juicio es la probidad de Gendarmería, ese es un tema sin solución, pues si habrá incentivos perversos para que Gendarmería sea presa de esas malas prácticas, ello puede ocurrir en cualquier escenario. Eso le parecía bien discutirlo, en ambos proyectos había diferencias relevantes, pero van en el sentido adecuado.

La diputada señora **Turres** consultó, en el sentido de lo planteado por Paz Ciudadana, que se modificó el reglamento y ahora habría un consejo técnico que de alguna manera recomendaría o no estas salidas. Consultó cuan vinculante es ese informe, eso es necesario conocerlo, y otro, si el ministerio de Justicia tiene estadísticas sobre reinserción sobre cada penal, para saber si algún sistema que se esté aplicando el algún penal específico está funcionando según las expectativas, bajo o sobre ellas. Es bueno tener esos datos por cada penal, porque si no de qué forma se mejora lo que se tiene, si no se tiene un hilado más fino. Acá se están haciendo tales cosas, tantas personas con salida diaria, con libertad condicional, y se obtienen mejores resultados. Sin información no se puede adoptar buenas decisiones.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** señaló que le pareció interesante el punto planteado por la Defensoría y Paz Ciudadana, sobre eliminar el requisito de estar usando permisos, por su falta de objetividad y discrecionalidad. Estimó difícil objetivarlo, por lo que convendría eliminarlo.

Al conocer los informes sobre sistemas comparados, el eje de todo esto, del cumplimiento de las penas es la rehabilitación, pareciera que existe una metodología, una infraestructura en esos países para sentir que la persona se rehabilita y la persona cumple cierta cantidad de tiempo.

En cuanto a la estadística, sobre que quienes reinciden menos son los que han obtenido la libertad condicional frente a los que tuvieron pena completa, consultó si era difícil elaborar esa estadística, consultó como se arribó a esa información.

El diputado señor **Sabag** consultó sobre la estadística de reincidencia, 23% vs 58%. Una golondrina no hacía verano, pero el hecho está, según eso sería conveniente instar por la libertad condicional, no sabía si podía ser consistente en la cifra, si era contrastable. Si ello fuera replicable en los sistemas comparados, era algo revelador.

Sobre la discrecionalidad de los alcaides, el proyecto no aborda el tema, pero había que poner atención porque no puede concretarse la función en una sola persona, se requiere una decisión colegiada tratándose de la libertad del sujeto.

El diputado señor **Squella** consultó, alejándose de los textos de los proyectos, quizás un tema de fondo. Más allá de lo plantado, el derecho vigente tiene en vista la rehabilitación, y ello está recogido en los proyectos. En otras partes del mundo tienen también la rehabilitación como eje central. Pero le generaba ruido, qué sentido tienen los catálogos de exclusión, si corresponde incluir catálogos de exclusión o diferenciando requisitos, teniendo la vista la gravedad de los delitos o la naturaleza del delito. Era una pregunta abierta, pero lo contrastaba con las medidas alternativas. Si alguien no ha estado privado de modo previo de libertad, se persigue no contagiarlo, pero acá no, si la persona está rehabilitada, lo lógico sería otorgarle la libertad.

El diputado señor **Soto** hizo presente que hay un estudio sobre la implementación de los tribunales de penas, a propósito del cuestionamiento a que Gendarmería sea juez y parte en el tema, es un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional de 2010, encargado a la Universidad Diego Portales.

Acá se plantea la necesidad ineludible de la existencia de los tribunales de penas, y se plantea una solución provisoria, sobre implementar jueces especializados de garantía y orales. Se podría avanzar decididamente en el tema, para hacer más justo el sistema, detector de las personas con potencial rehabilitador. Solicitó que la BCN exponga sobre el estudio. Sería una contribución al debate, y quizás se podría encontrar una solución al problema vigente.

Compartía la preocupación de concentrar en una sola mano, en Gendarmería, toda la solución. Ya era malo la no existencia de contrapesos, incluso podría ser un foco de corrupción, siempre existen denuncias en el ámbito carcelario en eso contexto, en tanto actúan como juez y parte.

Le parecía complicada la propuesta de Paz Ciudadana sobre el pronóstico favorable, y eso incluiría un sin número de situaciones que podrían estar filtrándose en exceso, habría casos que ni siquiera podrían ser considerados, por no haber sido aprobados por Gendarmería.

El asesor **Irarrázabal** señaló que es discutible que se aplique proporción de la pena de modo diferenciado según delito. Hasta donde recordaba, no hay sistemas de proporciones en los sistemas comparados, sino que es igual para todos los delitos. Así lo fue también al inicio de la vigencia del decreto ley 321. Podría tener sentido en la retribución de la pena, pero dos tercios para delitos graves podría carecer de sentido si la pena ya es más amplia. La entidad de la pena ya debiese ser suficiente.

En otro asunto, el ministerio de Justicia ha hecho llegar estadísticas sobre monitoreo telemático, 111 personas, ninguna ha cometido delitos hasta la fecha. La tasa de reincidencia con monitoreo telemático ha sido baja, tanto en libertad vigilada como en libertad intensiva. En general, ha funcionado bastante bien ese sistema.

La representante de **Paz Ciudadana** señaló, sobre los informes emanados de los consejos técnicos que si son vinculantes, pero los reglamentos vigentes disponen una conformación acotada, y en realidad la configuración está dispuesta en una resolución del Director Nacional, la estructura está en una resolución, y ello muestra la fragilidad de la institucionalidad.

En lo vigente, hay una configuración de profesionales y otra, de uniformados, y en conjunto toman la decisión, pero quien dirime es el alcaide. Por eso en el estudio del 2012, lo que se observó es que era altamente discrecional a la visión del alcaide, entonces ni siquiera los insumos eran tenidos a la vista, sino la opinión del alcaide. Se están modificando hoy los consejos técnicos, pero sigue presidiéndolos el alcaide. Aunque se fuese estricto, 50% o mayoría, la práctica informa que nadie se opondrá a la opinión del alcaide.

Sobre las estadísticas de reincidencia, no hay datos desglosados por penales, y la razón es que no se puede hacer un ranking porque los niveles de compromiso delictual en cada penal son distintos. Algunos recintos, los concesionados por ejemplo, tienen los más peligrosos, y ahí podría haber mayor reincidencia, pero en los de educación y trabajo, los índices podrían ser mejores.

El estudio fue un seguimiento estadístico por tres años, de penas alternativas, y se les siguió tres años para saber si eran condenados nuevamente a penas alternativas o privativas. A tres años de observación, se pudo ver que el 23% reincide con libertad condicional.

Lo que si dice la estadística es que están siendo bien seleccionados. Los conocimientos del decreto ley 321, aun así están siendo bien seleccionados, pues reinciden menos, y además, si existieran suspicacias, hay un estudio de Gendarmería de 2013 en la misma línea, pero sólo los siguió por dos años, y en ese estudio los que estaban en libertad condicional reincidieron 13,8% frente al 42,8% que cumplieron completa la condena. Así, se ratifica que los candidatos sí están siendo bien seleccionados.

Por ello estos proyectos comprimen el sistema. Por ello, bastaría el informe favorable de reinserción, requisito tercero, y no el cuarto, la obtención de permisos.

Sobre catálogos de exclusión, su justificación no es la prevención especial positiva, sino mera retribución. Entonces, no hay mayor filosofía detrás de eso.

Sobre los estudios de ejecución de penas, hay un estudio de Paz Ciudadana de 2014, donde se ve como está el tema en Alemania, España y Argentina, y la mayoría de ellos tiene jueces de ejecución de penas, y la solución impropia, donde el propio tribunal sentenciador tienen radicado el control de la ejecución de la pena, que sería una solución a la situación vigente.

La asesora **ministerial** señaló, sobre la cifra desagregada, que ella no se tiene, pues cada penal tiene perfiles distintos de internos. En cuanto a los permisos de salida, lo que se trata es establecer un mecanismo más objetivo para los consejos técnicos, cada unidad penal tiene una dupla sicosocial, la dupla está conformada por un sicólogo y un asistente social, y el jefe técnico es jefe de área. Se hace participar a estos profesionales en los consejos técnicos para que tengan voz y voto.

Así, se trata de un procedimiento administrativo, y sus decisiones tendrán que ser fundadas. Si se tiene un informe del sicólogo favorable, no puede el alcaide, simplemente porque no, votar en contra, porque tendrá que ser una decisión fundada.

La diputada señora **Turres** señaló que se debían comparar situaciones semejantes. Había penales concesionados en diversos lugares, y por ejemplo, tardó muchísimo crear algún tipo de taller en Puerto Montt. Claro, en algunos lugares tienen a los chiquillos tejiendo a crochet, pero en Puerto Montt una empresa los contrató para fabricar redes para las pesqueras.

Por ello es que siempre es bueno poder comparar, en este penal se está funcionando de esta manera, existen tales opciones, ojalá comparando penales con similares características, siempre se puede buscar algún patrón para comparar, y no es malo el ejercicio. Si no, siempre se estaría dando palos de ciego. Todos hablamos de la reinserción, pero se necesita saber si el Estado realiza acciones en un determinado sentido, si esto está resultando o no.

El diputado señor **Gutiérrez** señaló que el proyecto se basa en que la libertad condicional está mal concebida, y se otorgan en demasía. Entendía que había un juicio crítico, pero habría un otorgamiento indebido, y lo que pretendía subsanar el proyecto era la dación indebida de libertades condicionales. Consultó si acaso esa era la opinión del Ministerio.

El diputado **Farcas** señaló que el proyecto tiene un claro sentido, el espíritu es colocar más restricciones a la dación de libertad condicional. Fue por todos conocidos que hubo un crecimiento explosivo de las libertades condicionales, y a juicio de muchas personas, esto constituye un derecho y no una oportunidad. Pero había que ser claro, ya sea un derecho o un beneficio, el diagnóstico es restringir la dación.

El diputado **Trisotti** consultó, no tanto sobre la concepción del proyecto, sino a los efectos prácticos. En el artículo 6° del senado, se plantea que como consecuencias de la dación, quedarán sujetas a las supervigilancia de Gendarmería, un plan de actuación individual. Acá se habría innovado respecto a la situación vigente. Consultó si esta propuesta es o no posible de cumplir, si cuenta hoy Gendarmería con presupuesto para dar cumplimiento a estas reglas, y si existe un informe financiero para la contratación de nuevos funcionarios.

La asesora **ministerial** señaló que existe un informe de Gendarmería. Los CAIS ya están funcionando, y además, la lógica es que quien sea beneficiado con la libertad ya estará haciendo uso de un permiso, por lo que el CAIS ya está interviniendo, y acá sólo tendría un seguimiento. El CAIS lo toma, hace un seguimiento, obviamente, la intervención será mínima, y será un control mensual. En ese contexto, con el requisito previo de la salida previa, no tendrá mayor gasto.

El asesor señor **Cortés**, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante ‘INDH’), señaló que en términos generales, todo tiene que ver con la necesidad de que la política pública de seguridad ciudadana se enmarque en los estándares de derechos humanos pertinentes, cuestión fácil de decir pero difícil de concretar derechamente. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2009 sobre seguridad ciudadana, señaló que al decir que es una política pública que pretende ser sustentable y ejecutada en el mediano y largo plazo, no caben los cortoplacismo, deben ser evaluadas en el mediano plazo para hacer los ajustes necesarios. Pero lo que se observa en la región, es que los debates se desarrollan en los procesos electorales, antes que debates masivos sobre los factores que inciden en estos problemas, generándose un populismo punitivo.

Hay un nivel de la legislación que pareciera fácil, que es disponer exactamente lo que la ciudadanía pide, pero cuando se pierde esta mirada de largo plazo los planes pierden sus objetivos. La agenda corta pretendió agravar el régimen de penalidad en los delitos que causan más inquietud, pero si en el proceso de hacer eso se deroga una atenuante especial, que ha estado presente largos años en la legislación, cuando se actúa con una lógica de emergencia, no se da cuenta que ocurre una derogación, al derogarse la agravante especial, muchas de estas personas tuvieron que ser puestas en libertad. Esas situaciones hacen necesario legislar con miradas de largo plazo, pues de lo contrario, se cometen errores, o no se analizan los antecedentes con el tiempo suficiente para que las reglas se impongan.

Refirió el trabajo de María Angélica Jiménez, del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad Central, donde analizan que en lo que va de la reforma procesal penal han ocurrido que problemas operativos, donde se ha planteado que en lugar de mejorar la coordinación en la criminalización secundaria, se intenta solucionar en tema el plano penal. Entonces, antes de ser evaluadas las medidas, vuelven a ser modificadas. Así, el INDH entiende que se requiere una mirada de más largo plazo para plantear modificaciones al sistema.

Se está modificando un decreto ley de 1925, con un Código Penal de 1874 y un Código Procesal Penal del 2000. Hay una dispersión normativa y filosófica de los proyectos que colisionan, que no se ve en su redacción sino en su aplicación. En los alrededores del centro de justicia se percibe también esa dispersión, donde hay una cárcel es de más de dos siglos, junto a una cárcel de máxima seguridad de los últimos años, y dentro de todo eso los internos circulan dentro o fuera en ese entramado penitenciario.

Es importante, a su juicio, darse cuenta de lo que implican estas modificaciones en lo operativo. Pocas veces se saca la conclusión cuando en el artículo 85 del Código Procesal Penal se cambó la facultad de la policía, de 'podrá' a 'deberá'. Refirió que le tocó presenciar como testigo una audiencia donde se discutió la ilegalidad de tres detenciones, donde la policía oyó que los sujetos estaban fuera de un local, y dijeron que iban a entrar 'y hacerla cortita'. Pero como las faltas se sancionan solo si están consumadas, las policías esperaron que el delito se cometiera, y en su alegato de defensa, el defensor señaló que al haber oído la conversación la policía estaba obligada a realizar el control. Ese es otro ejemplo que en la dimensión operativa debe ser tenida en cuenta, para no modificar en sede legislativa cuestiones que corresponden a lo operativo del proceso penal.

Era simple modificar las leyes penales. Se sustituía un presidio menor por medio o máximo, pero la discusión debía ser sobre el sentido de las penas, ello es más profundo y refiere sobre el tipo de Estado que se quiere, el tipo de las penas, que en el ámbito jurídico son cuestiones complejas.

Como INDH, antes de analizar el proyecto, se trató de detectar los estándares internacionales vinculados al tema. Tanto al nivel global como regional, hay un claro pronunciamiento por una finalidad positiva en la aplicación de las sanciones. Las penas deben tener como finalidad la rehabilitación de los condenados, readaptación de los penados. Si los tratados acogieran que las penas son retributivas, no tendría sentido discutir si la libertad condicional es un beneficio, o si por el contrario es un derecho de las personas que se encuentran privadas de libertad. El propio reglamento de la ley señala que las personas sólo han perdido su libertad ambulatoria. Esto implica que al momento de la ejecución, la persona tendría el derecho a postular, y cumpliendo los requisitos, debería otorgarse.

En los fundamentos del boletín, se tiene casi exclusivamente a la vista el que a principio de año el aumento de las libertades condicionales fue exorbitante, y como reacción a eso la cuestión es ponerle más límites. Dos datos son esenciales en el tema. Uno es de Paz Ciudadana, donde demuestran que la libertad condicional en Chile ha disminuido considerablemente su campo de aplicación, la cantidad de beneficiados ha decrecido y ha descendido en cuanto a la proporción, representando un 11,5% de los condenados el año 2000, frente a un 1,4% del 2010. El otro, es que de acuerdo a cifras de Paz Ciudadana, el nivel de reincidencia es mayor, 58% de reincidencia en los que cumplieron toda la pena, frente a los que obtuvieron libertad condicional, que fueron menos.

Si la preocupación es la seguridad ciudadana, y ella se lee a través de derechos humanos, hacerlo más eficaz se logra al reforzar las funciones de las Comisiones de Libertad Condicional, aunque en definitiva es necesaria una judicatura especializada de modo general, y no ir reaccionando caso a caso. Para tomar en serio la cuestión de la reinserción social, que lejos de ser contrapuesta, debe potenciarse, le parecía que esto debe entenderse como un derecho, debe haber una posibilidad de control judicial cuando se deniega el beneficio, y sobre todo, debe estudiarse la manera de dar un apoyo previo a la salida de la institución penitenciaria. En cuentas, las conocidas reglas Mandela, regla 87, que es conveniente que antes de que cumpla toda la condena, debe adoptarse medidas para que el sujeto logre una adecuada reinstalación en la sociedad.

Sobre la moción en estudio, el INDH entiende que se debe asumir lo anacrónico de una legislación, se la lee y está escrita con castellano antiguo, es necesario hacer la revisión profunda, pero ello debe vincularse con la reforma procesal penal. Hay adecuaciones del lenguaje, habla de personas condenadas, se habla de un proceso de intervención, y esa modernización parece pertinente, pero no estaban de acuerdo con la apuesta de, modificando lo vigente, que lo reconoce como derecho, lo estima un mero beneficio. Esto es un derecho, si cumple con los requisitos que se les exige para optar al derecho, les parecía que esa perspectiva debe mantenerse.

Le parece criticable la exigencia de cuatro calificaciones seguidas de buena conducta. Se requeriría una reforma más profunda en el tema, pues esto es una norma de naturaleza reglamentaria, y ello desafía la reserva legal en materia de derechos, otorgando mucho poder a la autoridad penitenciaria, que casi no tiene forma externa de control.

En términos generales, en los informes sobre condiciones carcelarias emanados del INDH, la cuestión es que sobre la base de los mismos hechos, se termina aplicando la sanción según reglamento penitenciario. Estas exigencias terminarán en que Gendarmería terminará siendo el que tenga la facultad de definir quién podrá gozar de libertad condicional. En más de una ocasión, ante el INDH un interno denuncia apremios ilegítimos y a la calificación siguiente tiene pésima conducta, cuando antes de eso durante dos años tuvo buena conducta.

En cuanto a que deba estar gozando de permisos de salida, la estadística es que ella es baja, por lo que era discutible como requisito. Lo mismo en relación a considerar el delito para el momento de conceder la libertad condicional, si se entendía que en toda imposición de condena la gravedad del hecho ya fue considerado. Volver a ello podría ser una doble valoración, y ya en el régimen vigente se reforzaría, existen ciertos delitos que exigen mayor tiempo de duración, dos tercios. Volver a hacer esa valoración, parecía incorrecto.

Por todo, parecía adecuado el actualizar la terminología, reiteraba que era necesario disponer una judicatura para la ejecución de la pena, preocupaba que se eliminara el considerar un derecho y estimarlo como mero beneficio, e incluso habría que fortalecer el debido proceso para resolver sobre la procedencia de este beneficio. La calificación de conducta, el solo usar los informes internos, dejaba entregada en exceso a las autoridades penitenciarias al concesión de la libertad condicional.

El asesor señor **Mery** señaló que no podía dejar de relacionar el tema con una editorial sobre la labor legislativa y una falta de celo en el proceso de formación de las leyes, sobre el modo de legislar[[3]](#footnote-3). Se refirió a esto porque en el proceso de formación de la ley no solo intervienen ambas ramas del Congreso Nacional, es un proceso complejo, con sus múltiples asesores, asesores de los servicios públicos, y a propósito del delito de colusión, salió una crítica bastante severa de que los defectos, que pueden ser diferencias de opiniones, no necesariamente fallas del proceso de formación de la ley, se debían a que el análisis sería imperfecto al momento de legislar.

Por qué este preámbulo. Porque esto es algo mucho más sensible, porque recae en la seguridad pública, entonces, sea lo que sea, todos estamos expuestos a la crítica, pero la opinión que sea sometida a votación, no debe asumirse como la correcta. No tengamos el mal gusto en transformar en error una derrota, en estimar que el producto es malo porque nuestra opinión no quedó reflejada en el texto legal. Era bueno tener muy claro que en estos puntos tenemos que ser particularmente cuidadosos, y que la opinión que sea derrotada, no sea criticada como falencia del proceso legislativo.

Se pueden manifestar posiciones diversas, traspasa un poco todo el derecho penal la discusión sobre la naturaleza y fin de la pena, y como se puede conceder la libertad condicional a las personas condenadas, para conciliar la posibilidad de rehabilitarse, con la naturaleza de la pena, que es una retribución, y la finalidad, que es una prevención general.

Recordó un seminario en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde el profesor Agustín Squella señaló la tendencia a resolver los problemas mediante leyes cortas. Con ellas se ha puesto solución a los problemas, eludiendo discusiones más profundas. El ideal es que exista una judicatura dotada de facultades en materia de ejecución de la pena, que exista un juez es esencial, pero tenemos que ceder ante la aparición de otras necesidades que requieren los recursos. Diseñar un sistema de control de penas son palabras mayores, y requieren un desafío de Estado que excede a este proyecto.

Agregó que el decreto ley N°321 ocupa un lenguaje anacrónico, y la configuración de los requisitos parece estar en tener sintonía con la realidad actual, y desde esa perspectiva, al aprobarse en primer trámite es un ajuste razonable de los términos. No veía un problema en esa nueva redacción, era plausible, y en el sentido general del proyecto, la innovación que propone es una puesta al día, no es más que eso.

Un expositor de la sesión anterior hizo presente eventuales formas de conductas contrarias a la probidad, o sobre la necesidad de mecanismos de efectiva revisión judicial. Disentía, porque aunque el texto no lo contenga, existen y se usan las acciones de amparo para hacer frente a las denegatorias de la libertad condicional. Una revisión general realizada para esta sesión, daba cuenta que en legal publishing había siete sentencias de la Corte Suprema en el tema esta semana. Que no esté reglamentado pormenorizadamente en este texto una revisión judicial específica, podía ser hasta una ventaja, porque la posible regulación legal, podía implicar el imponer restricciones. Guardar silencio podría ser hasta más conveniente que disponer reclamaciones, hoy el control jurisdiccional existe, y el solo pensar en introducirlo podría ser un riesgo para la concesión de libertades condicionales.

Hablar que es un derecho y no un beneficio, es cierto, un lenguaje más acorde para hacerlo justiciable lo entiende como derecho. Pero en definitiva, más allá de la denominación, será una manifestación del derecho de petición. Nadie podría entender que este beneficio, la comisión lo podría conceder o denegar a su antojo, no hay poder para actuar de modo arbitrario.

Es interesante, subrayó, el comentario de la defensoría sobre el lenguaje usado, en cuanto entenderlo como medio de prueba. Ello tiene una explicación, bien anglosajona, el instituto se denomina *aprobation*, está en la legislación, y su vigencia no provoca mayor escozor.

Se ha discutido la pertinencia del numeral segundo, y se ha criticado pues daría pábulo para la actuación arbitraria de la comisión o gendarmería. La crítica justa sería comparar lo vigente con la propuesta del senado. Se sabe que ello está más desarrollado en el reglamento, el INDH ha hecho el punto, pero la redacción del senado gana, y siempre debe entenderse más como requisito, como una condición favorable. Así, si la cuestión es un requisito, no era de vida o muerte que se trasladara y quedara como un beneficio del solicitante, no como requisito o escollo, no que deba reunirse y que quede al entero criterio de la autoridad.

En cuanto al tercero, hay solicitudes de posibles invitados porque hay referencias a los crímenes de lesa humanidad a que se refiere la ley N°20357. Entendía que esta referencia solo cabía a los delitos señalados en ese texto legal, y no a otros cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.

El proyecto, sin resolver definitivamente el problema, pues se requiere una judicatura de ejecución de penas, es un cambio de aceite a un kilometraje determinado. Salvo los puntos que se han hecho mención, las críticas que se han esgrimido, más que ser injustas, buscan un ideal para lograr un proyecto más ambicioso.

El asesor señor **Welsch**, por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que la moción modifica los requisitos para la concesión, y ha sido objeto de discusión el que se establezcan los permisos de salida como requisito. Esto no es otra cosa que progresividad de la pena, se va abriendo la puerta hacia su libertad total. Una es la salida dominical, que es un año antes de la postulación a la libertad condicional; después viene la salida al medio libre, que ocurre seis meses antes del plazo de solicitud para la libertad condicional. Así, el sujeto va accediendo a espacios de libertad, ese espacio muestra que el sujeto va adaptándose de buena manera para desempeñarse en el medio libre.

Es Gendarmería, la ley orgánica de Gendarmería dispone dos fines, la seguridad que los internos no se escapen, y el otro contribuir a la reinserción social. Son ellos los que están día a día con los internos. Es fundamental que el permiso de salida sea un requisito, pues muestra que puede estar en libertad, da muestras de su reinserción. Es destacable señalar el número de libertades condicionales otorgadas frente a permisos de salida, los permisos de salida no son entregados al azar, ni con elementos de corrupción, es un proceso serio.

Dichos datos evidencian que el sujeto está apto para el medio libre, y la tasa de reincidencia, de los que gozaron de un permiso de salida, es 10 puntos menor que quienes no la obtuvieron. El haber gozado de libertad condicional muestra que está reinserto de mejor manera. No parecía lo correcto cumplir toda la pena y no haber tenido espacios previos de reinserción.

El año 2012 se modificó la ley, sacando de la Seremi la decisión en este tema, a favor de las comisiones de libertad, pero nada se dijo respecto qué se hace después de que el sujeto obtiene la libertad condicional. El proyecto de ley dispone que sale sujeto a un plan de intervención que hará Gendarmería de Chile. La única condición hoy es ir a firmar, en cambio lo que se propone es que sigue vinculado a la institución y tienen que seguir un plan en los Centros de Apoyo para la Integración Social (en adelante, ‘CAIS’), obtener capacitación, un puesto de trabajo, este es uno de los grandes cambios, hoy la mera firma no da garantías de nada. El apoyo, acompañamiento sicosocial es fundamental, y debe destacarse.

La diputada señora **Turres** consultó, respecto a lo afirmado por el INDH, que el año 2000 el 10% de los condenados accedían a libertad condicional, y que esto había disminuido a 1,4%. Solicitó ratificar esas cifras, y si podía aclararlo el Ejecutivo, pues son cifras muy bajas, y podría entenderse como que muy pocos cumplen los requisitos para acceder a las libertades condicionales, quizás porque los recintos no otorgan las facilidades para que ellas se cumplan, o si acaso el tema estuvo en el traspaso de competencia de los Seremi a manos de las Comisiones de Libertad Condicional, quizás estas eran más exigentes en el cumplimiento de los requisitos.

Como sea, es un muy mal panorama respecto a las posibilidades de quienes han cometido delitos, para poder rehabilitarse, sobre todo pensando en aquellos que han cometido delitos sin ser autores habituales, ya sean desde el orden sentimental, hasta quienes por falta de control en un momento dado delinquieron, distintos casos que no son tan recurrentes. No sabía si el Ejecutivo tendrá alguna estadística para poder comprender a fondo quienes son los que piden libertades condicionales, y quienes los que acceden a ellas. Toda esa información puede ilustrar para saber adónde apuntar, no solo al Congreso, sino al propio Ejecutivo, Gendarmería, si es que a raíz de todas las crisis que se han vivido, Gendarmería es una de las más grandes, quizás esto pueda servir para acotar de alguna manera y dejar mejor establecido cual es la labor de Gendarmería.

Señaló que el mismo profesor dijo que la cárcel debería ser una oportunidad para enmendar su rumbo, pero estimó que la mayor cantidad de las personas ven la cárcel como un lugar para encerrar por el mayor tiempo posible a quienes cometen delitos, y no se ve posibilidades de reinserción social. Sería bueno como Comisión tener alguna información más clara en el tema, quizás no se tenga hoy, pero hacia lo futuro, para saber si habrá algún cambio a tener en cuenta para el momento de nuevos proyectos de ley, quizás sobre carrera funcionaria.

Consultó sobre la ley N°20.357, y los condenados por crímenes de lesa humanidad, en el otro boletín queda más en el aire la referencia. Los crímenes de lesa humanidad quedaron insertos en Chile el año 2009 con esa ley y consultó si esto lo que persigue es que los internos de Punta Peuco tengan que cumplir dos tercios, o la cuestión es si solo hacia lo futuro, dios nos ampare que eso ocurra, y cuidemos nuestra democracia. Con una mirada a futuro, la referencia a quienes cometen delitos sexuales, y hay otros tipos que vienen con una exigencia de quorum mayor. Claramente la situación procesal de muchos de los condenados en Punta Peuco no se compadece con las garantías de los imputados del nuevo sistema procesal penal, no pasaría ningún control respecto de la valoración de la prueba, y desde ese punto de vista, algunas condenas han sido sancionadas por normas que distan de hacer justicia o aplicar el derecho.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** manifestó que para conceder la libertad condicional, se ha puesto en cuestión el haber sido beneficiado de modo previo con permisos.

El diputado señor **Sabag** consultó si eran partidarios de la libertad condicional. Las estadísticas informan, y si fueran consistentes, serían contradictorias con la idea matriz de este proyecto.

El asesor señor **Welsch** señaló que el 8% obtuvo la libertad condicional el año 2016, en un universo de 30.000 condenados, fueron 2314 las libertades condicionales otorgadas. Del año 2000 al 2010, hubo una tendencia a la baja, y con la modificación del 2012, al alza, de 795 el 2010, a 3352 el 2014. El primer semestre de 2016, 2314.

Respecto a quienes se presentan a libertad condicional, gendarmería debe presentar a todos quienes cumplan los requisitos mínimos, encontrarse en lista uno y dos, cumplimiento de tiempo y conducta intachable. Se debían presentar sobre 7.000 personas, y muchas veces se presentan personas que se sabe que no tienen ningún avance, pero la ley obliga y es una carga inmensa para la institución.

Sobre los delitos, siempre debe haber una ventana para la persona, no importando el delito que cometió. La ley N°20.357 aún no tiene condenados, pero se acota a ellos.

Los permisos de salida están siendo revisados, hoy el reglamento vigente dispone que el permiso es dado por el alcaide, y la modificación que se espera ingresar en el segundo semestre, donde se pasa la atribución al consejo técnico, presidido por el alcaide e integrado por el sicólogo, el asistente social. Ya los permisos de salida no son sujeto al solo criterio del alcaide, hay un consejo detrás que es el mismo que remite el informe a la Comisión de Libertad Condicional. El efecto de sacar el permiso de salida, es un beneficio que puede ser salida dominical, fin de semana o medio libre.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** señaló que tal como está hoy, no necesariamente implica una rehabilitación en tanto es el alcaide el que lo otorga.

El asesor señor **Welsch** acotó que actualmente, el reglamento vigente dispone que el consejo técnico se reúne y presenta informes sobre los avances efectivos del avance, y el alcaide decide, siempre oyendo al Consejo Técnico, por lo que si no tiene avances, no debe acceder al permiso de salida. Si el sujeto ha salido todos los domingos, ha cumplido, ha regresado en tiempo y forma, da una evidencia que en su libertad total actuará conforme a derecho.

En cuanto a la libertad condicional respecto al informe, una persona puede tener un informe favorable para el permiso de salida, gendarmería dice puede salir los domingos, la idea es que si el Consejo Técnico concede el permiso de salida y propone al sujeto a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, esta podrá decidir. Si se elimina esto como requisito, Gendarmería presentará a todos quienes cumplan los otros, serán 5.000 o 6.000 postulantes, mientras que si se acoge este requisito, sólo presentará unos 1.500.

No estaban contra la libertad condicional, pero esta política no era para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Si se quiere que los sujetos salgan en libertad, las personas deben demostrar avances en su situación sicosocial, y no como respuesta al hacinamiento.

La asesora señora **Morales**, por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estimó que hay un consenso en que los permisos son necesarios como un paso previo. En un informe de Paz Ciudadana y del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, de la Universidad de Chile, cualquiera sea la fórmula, la evidencia está acorde a una liberación progresiva.

Es decir, el principio es unánime. Se puede diferir en el cómo se están otorgando los permisos, pero la solución es dejarlos y mejorar el sistema de cómo se otorga. Así, el cambio al reglamento es paradigmático. Es cierto, hoy es una competencia del alcaide, pero será del Consejo Técnico, va el sicólogo, eso es lo que viene. Estaban pensando la libertad condicional, que es de 1925, y todas sus modificaciones han sido en aumentar los delitos que requieren dos tercios, y el 2012 se modificó el órgano que lo otorga, pero ninguna ha sido relativa a los requisitos para acceder. Por eso se defiende el tener una aproximación paulatina, la solución no pasa por eliminarlo.

El diputado señor **Saldivar** señaló que se plantea perfeccionar los equipos que trabajaran con los internos que recomendarán las salidas, pero varios han planteado la necesidad de una judicatura en el tema. Consultó si lo que se plantea es previo, o definitivamente está descartado. Le parecería mucha más eficaz el crear una judicatura, pues ello da más garantía. No cuestionaba a priori la creación de equipos.

El asesor señor **Welsch** señaló que actualmente los jueces de garantía actúan según el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que tienen competencia en materia de ejecución. En relación con permisos de salida, o beneficios intrapenitenciarios, ha sido señalada la necesidad de tener una ley de ejecución. Es un tema que se ha discutido y trabajado, pero el reglamento ha estado acorde con las necesidades para regular el tema de, no se descarta el tener una judicatura, pero no es la actual discusión.

El asesor señor **Mery** señaló que no había desacuerdo con el Ejecutivo sobre la necesidad de que exista el permiso previo, pero ponerlo como un requisito, la finalidad de eso puede ser lograda de otra forma a favor del solicitante, no como un obstáculo. La semana anterior se enfatizó que esto sería un obstáculo.

El asesor señor **Cortés** señaló que hay cuestiones que se ligan a la recomendación principal, el tema de la integralidad, en el plano del deber ser, evaluar la conducta y que esta sea buena intramuros, y que gradualmente vayan accediendo a niveles de libertad, es correcto. Pero tal como se contempla en la propuesta, disminuirían las libertades condicionales, entonces no sabía cuál era la solución, si esperar una legislación de conjunto, o acotarse al tema de la forma de calificación, pues si ella se modificara no sería problema, pero el problema actual no se solucionaría y habría una nueva disminución de la cifra de beneficiados con la libertad condicional.

Lo más radical como análisis de cifras en Chile es el trabajo de Salinero, sobre por qué aumenta la población penitenciaria en Chile. Somos el país más encarcelador de América Latina, entonces, la libertad condicional es más que gestionar el hacinamiento. Se legisla aumentando la población privada de libertad, y si se restringe la libertad condicional, es una bomba de tiempo de violencia social. Por ello, eran partidarios de la libertad condicional, pues se entiende que la prisión es una amarga necesidad.

Se recibió, además, la opinión del señor Enrique Aldunate, por la bancada socialista, quien señaló que había tres cuestiones de las cuales hacerse cargo. La primera cuestión, es que hace rato existe una crítica generalizada, no solo por la doctrina, sino más bien por consideraciones de orden práctico, que cuestiona la naturaleza administrativa de la dación de la libertad condicional.

Es precisamente a raíz de esta naturaleza administrativa que se cuestiona que se entregue el tema a un órgano de ese tipo, y que eventualmente debería estar entregado a una judicatura.

Agregó que existen estudios antiguos, por ejemplo el de Jorg Stippel, que sostienen que al atender a esta estructura administrativa se constriñe al penado por eventuales represalias pues el que resuelve es juez y parte. Hay estadísticas que señalan que entre un 35 a 40% de los penados no ejercen los reclamos administrativos por represalias a sus reclamos.

En este contexto, subrayó, se sostiene que existe una relación asimétrica entre el condenado y el que debería resolver una cuestión en que están de por medio no solo cuestiones de avanzar a un beneficio, sino también derechos de los internos.

El principal, a su juicio, el principio de legalidad, en virtud del cual se establecen sanciones a nivel reglamentario, cuestión básica es que las sanciones las disponga la ley, y el procedimiento en virtud del cual se puede reclamar debiese ser de naturaleza jurisdiccional, y por eso se recurre a soluciones extraordinarias como la acción de amparo.

A su juicio, a nivel de procedimiento Chile también está en déficit, y las mociones en estudio no dicen nada, absolutamente nada. En ese contexto, señaló, otros expositores ya han planteado la situación del derecho comparado. Entre ellos el derecho penal peruano, que cuenta con un código de ejecución penal, que considera la existencia de un juez que es quien resuelve el debate sobre ejecución de penas. Es un asunto jurisdiccional, porque están en juego derechos de los penados, así, las visitas, visitas íntimas, trabajo, asistencia social, está regulado en un código especial de ejecución. Así, el déficit del sistema chileno, que se arrastra desde 1925, es palmario y requieren revisión profunda, y los boletines no resuelven nada en el asunto.

Recordó una publicación del acedémico Eduardo Novoa Monreal, de 1966, oportunidad en que éste criticó el sistema penitenciario, pues no está preparado para asumir los problemas que conlleva la libertad condicional, y, a su juicio, perseverar en un esquema que acrecienta estos problemas, no es una solución para nada.

Agregó que en 1973, el abogado señor Künsemüller, integrante de la Corte Suprema, escribió, a propósito de la visita de Claus Roxin a Chile, perseverando en el diagnóstico señalado. El profesor Enrique Cury llegó a las mismas conclusiones sobre el déficit estructural del sistema penitenciario chileno para hacerse cargo de las ideas que se plasman en la libertad condicional.

Teniendo presente las posibilidades concretas de reinserción, enfrentamos soluciones mecánicas, sin hacer análisis más detallado de las situaciones concretas de los penados.

La situación, subrayó, es bastante compleja, si se ve el contexto global del sistema procesal penal chileno, pues en determinados contextos el legislador ha dicho “su caso, probablemente, sea una exageración ir a juicio oral, pues la entidad de los cargos no son fuertes”, y se ofrece una suspensión condicional del procedimiento. A reglón seguido, plantea “lo suyo tiene connotación patrimonial, y si se satisface una reparación, celebre un acuerdo reparatorio”, y no persevero. Luego, estamos a punto de ir a juicio oral, y la condena no será efectiva, será una pena sustitutiva, y se acuerda resolver todo en un juicio simplificado, y el condenado no será cliente del sistema carcelario. Pero una vez condenado, qué encontramos. Por una parte la libertad condicional dice que quienes cumplan los requisitos 1 a 4 del artículo 2°, pueden solicitar la libertad condicional, esa es la premisa, pero resulta que si se ve la complejidad y amplitud del ordenamiento jurídico, desde las reformas a la ley 18.216 (artículos 33 y siguientes), puede haber penas mixtas, y sus requisitos de procedencia es que las persona haya cumplido un tercio de la condena, que no registre nuevas condenas, y un informe de procedencia habilita a que se transforme la condena en una libertad vigilada intensiva.

Bajo esas premisas, el legislador regula que una persona obtenga tempranamente su libertad. Entonces, la pregunta es quien resuelve la pena mixta, si acaso una comisión de varias personas, o en cambio, que es lo que en realidad ocurre, la resuelve el juez de garantía. La resuelve un juez, y el sistema no se vino abajo. Ello es paradigmático, la reforma es reciente, y ello posibilita el ejercicio de estos beneficios a favor de las personas.

En concreto, planteó, si se quiere corregir el problema, y entendía que la Biblioteca del Congreso Nacional hará una referencia a un informe de la Universidad Diego Portales en el tema, es que estructuralmente, una solución es que sea posible que en esta materia se olviden de estas comisiones que semestralmente se hacen cargo, y consagrar que el sistema de ejecución esté entregado al juez de garantía. Se planteará que esto saturará el sistema, pero si se cuantifica cuantas son las solicitudes de quienes están en condiciones, no sería problema.

Acota que el anteproyecto de la Universidad Diego Portales hacía dos grandes modificaciones. La primera, al modificar la atribución de los jueces de garantía, y en segundo, un creaba un catálogo de situaciones específicas vinculadas al reglamento penitenciario, que son objeto de controversia, y ello es decisión de político criminal. Esa es la propuesta contenida en ese proyecto, y en su opinión, es una solución interesante para hacerse cargo de algo que tiene un déficit. En sede judicial se pueden generar soluciones, no hay que crear nuevos procedimientos, bastan las reglas generales. Si se piensa que el problema es la sobrecarga, el tribunal oral en lo penal podría conocer la situación de los condenados en tribunal de garantía, y los jueces de garantía podrían conocer la situación de los condenados en tribunales orales en lo penal. De esa manera se termina con el déficit del decreto ley 321, y no obliga a establecer semestralmente estas comisiones que revisan el tema. Esos tribunales son permanentes para resolver estas solicitudes, y descomprimen el sistema. Si se otorgaron 1.700 libertades condicional en un año, si se prorratean en el año, es la carga cotidiana de los tribunales penales.

Finalizó señalando que si quedara alguna duda, bastaría acudir cualquier día a cualquier sala de audiencia, y ver cuáles son los delitos de conocimiento de los juzgados de garantía, a qué están abocados. Llama la atención a que estén en presencia de hurtos-falta, o ley de drogas, sobre todo por consumo. Se podría llamar la atención a que la sobrecarga, a qué obedece, no aventuraba estadísticas, y ya las oficiales están sometidas a fuertes cuestionamientos, pero se podría pensar por qué delitos de menor entidad, como es posible que concentren la atención de esos tribunales, y eso llama la atención. Cuando se pensó la salida para los delitos de menor entidad, era que debían serlo por el procedimiento monitorio. Hay problemas estructurales que inciden en esto, y la solución correcta es abandonar la idea de 1925, y que esto quede radicado en los tribunales que correspondan. Se perdió la oportunidad con la ley de readecuación de jueces.

Al revisar el proyecto del senado, se modifican requisitos e informes en la materia. Estructuralmente, no innova el procedimiento ni se hace cargo en forma adecuada de un procedimiento de actuación. Desconocía la tasa de reincidencia después de la dación de las libertades condicionales el primer semestre de este año, desconocía en que quedó el tema porque, simplemente, el hecho no siguió siendo tema en las noticias. El boletín se hace cargo, pero mantiene el déficit estructural. Se podría considerar en cambiar el órgano que debe resolver el asunto, y ello no es un tema de iniciativa exclusiva presidencial, pues no se innova de modo central en lo que corresponde a los jueces penales en el Código Orgánico de Tribunales. Ese es un tema muy debatido, y por lo tanto, el congresista podría efectuar las adecuaciones necesarias para modificar esta situación, hasta que se adopte la política global.

El diputado Squella señaló que le hacía sentido lo planteado, lo que confirmaba que la urgencia calificada de discusión inmediata golpeaba el proyecto de ley. Agregó que puede que no haya problemas de iniciativa, pero hacer un cambio tan radical mediante una indicación parlamentaria no tenía destino. Si se perfecciona la herramienta, y nos acercamos a las decisiones técnicas alejándolas de la política contingente, estaría de ese lado de la mesa.

El diputado Ceroni (presidente) señaló que la exposición fue muy interesante, y lo que entendía era que tal como estaba, y venía del senado, el tema continuaba con un órgano administrativo, cuestiones que podría haberse solucionado creando un tribunal de ejecución, y se podría crear una situación mediante indicaciones que esté cerca de eso, y que sean los tribunales penales ordinarios los que revisen la situación. Es una buena idea, y la cuestión era en qué momento poder plantear esa discusión.

La diputada Turres consultó sobre las condiciones especiales para efectos de obtener la libertad condicional, y de qué manera se ve que esto se contrapone con la irretroactividad de la ley, y si dentro de ese tratamiento diferenciado, podría haber alguna inconstitucionalidad.

El asesor Aldunate señaló que ese tema ha cobrado nuevos bríos. Sinceramente, por una parte, si se fuese coherente con lo razonado por el proyecto del senado, ellos estiman que es un beneficio y no un derecho. Así se podría alegar, nadie discute la naturaleza administrativa de esto, que en buena cuenta se basa en la discreción, que no es problema salvo la discriminación. Si se plantea como cuestión administrativa, la discrecionalidad bastaría para plantear esto como beneficio, y que procede ese tratamiento diferenciado.

El punto es que hace largo rato existen restricciones en relación a la libertad condicional para ciertos delitos, donde se exige mayor número de años para acceder a esto, y esa lógica obedece, lo que está detrás de eso es que la gravedad del delito implica mayores requisitos, incluso a nivel de delitos terroristas pide un número mínimo de años. La discusión se plantea entonces en los delitos contra la humanidad.

Ahí hay dos órdenes de consideraciones. Sobre la aplicación de la ley N°20.357, ella tuvo un efecto en una ley especial. Cury, que en cuentas fue el autor de esa iniciativa, señaló que no tenía efecto hacia atrás, y sólo lo tendría hacia lo futuro, tuvo un efecto congelador. Entonces, qué pasaba con los otros delitos, si eventualmente se aplica la regla vigente, a las personas entre que cometieron delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Los tribunales chilenos han condenado por delitos codificados, comunes, homicidio, detención ilegal, secuestro, y la pregunta es si esos delitos caen dentro de las restricciones del decreto ley N°321. El homicidio sí, el secuestro no, y esa es una discusión. El punto es que, sinceramente, estimó y así lo ha planteado por escrito en algunas publicaciones, en esa clase de delitos se debe tener una consideración distinta. Si bien la regla es que la ley penal se aplica con efecto futuro, el alcance del principio de legalidad es la descripción del hecho y de la pena. Ahí sigue a Roxin, entendiendo que el principio de legalidad es tipificar el hecho, y la determinación de la sanción. Cualquier situación expost, no está cubierta por esa garantía, pues según Roxin, se determina el hecho y la sanción, pero no cuanto tiempo tiene el sujeto que esconderse.

En definitiva, el legislador cuenta con cierto margen de maniobra. Los alemanes, cuando se cumplían los plazos para perseguir los delitos cometidos durante la segunda guerra mundial, ampliaron los plazos, se discutió la naturaleza de la prescripción, pero igualmente resolvieron ampliarlos.

Además, el punto es que en específico cabía considerar otro argumento, y es que a diferencia de lo que podría ser un homicidio o secuestro, lo que entra en juego es que hay un elemento claro y permanente en esta clase de delitos, y es que las personas que cometieron esta clase de delitos contaron con el aparataje del Estado. Los delitos se cometieron con la aquiescencia del Estado, con sus recursos y existía la imposibilidad material de que fueran juzgados. Si la regla, los principios de legalidad fueron siempre dispuestos a favor del ciudadano frente al Estado, frente al Leviatán, y si son agentes del Estado quienes las usan, no corresponde hablar de este tipo de reglas, pues para hablar en términos de igualdad, se requiere el restablecimiento del orden constitucional. En 1980 o 1985 era imposible investigar, no era una pura cuestión normativa, sino fáctica que impedía siquiera plantearse la situación, entonces los plazos, en los hechos, estaban suspendidos o interrumpidos.

Su punto es que en esta clase de delitos, hay una situación de contexto que no se pude obviar, por lo que debía tomarse en cuenta si se afectan estos principios fundamentales, como que el hecho no estuviera descrito o tipificado, cuestión que sí estaba descrita. Entonces, el punto es si esas restricciones, ya sea en prescripción u otras formas de exclusión, se aplican sin más a estas personas. Esto es archidebatido, en todos los países, y en Alemania señaló que no era parte integrante del principio de legalidad, otros han adoptado reglas de imprescriptibilidad. Él prefería, optaba por la suspensión de los plazos.

Materialmente, hacer la revisión de todo el procedimiento y los órganos podían plantear la presencia de la víctima en la audiencia en que esto se resuelva, como ocurre en materia de penas mixtas, y otro tipo de audiencias de la ley N°18.216. En ese contexto, la situación del juez mejora, pues puede tener más antecedentes a la vista al momento de resolver, la magnitud del daño causado, etc.

La diputada Turres señaló que en ese mismo sentido, se sabía que la prescripción no se estaba aplicando en este tipo de delitos. Si se plantea que en esos años no se podía investigar, pero han pasado 26 años desde la restauración democrática, ya se puede investigar. Entonces, hasta donde extender los plazos, eso por una parte, y es un debate que bien puede darse. Al menos, este debate no se ha dado en esta Comisión.

De igual manera, está la no aplicación de la ley N°18.216, incluso para casos de condenados a 2 o 3 años, no hay beneficios intra penitenciarios hacia ellos. Claramente entiende y está de acuerdo con sancionar, y los tipos penales estaban vigentes, incluso ella aprobó las normas sobre genocidio y lesa humanidad (ley N°20.357), pero son contextos diferentes a los de hace 43 años. Entiende que se pueden tener grados de discrecionalidad, pero deben existir ciertos límites, y negar el agua, la sal, negar todo para siempre, cuando como legisladores se busca encontrar la paz social, la cuestión es que debe haber voluntad para buscar verdad y justicia, y cuidar el límite entre la justicia y la venganza.

El diputado Soto entiende que en los temas de violadores de derechos humanos, uno de los cuales sus condenas sumadas llegan a 263 años, entendía que lo que se está aplicando es el artículo 3°, que establece a los condenados por más de una sentencia se les sumarían los años para determinar la procedencia.

En los proyectos, tanto los tramitados en la Cámara como en el Senado, se establece la norma de concurso para el caso de varios años. Las personas condenadas a dos o más penas, que sumen más de 40 años, sólo podrán optar cuando haya cumplido 20 años de reclusión.

El asesor Aldunate señaló que eso sería una situación excepcionalísima. Las condiciones materiales en que se han cumplido las condiciones de cumplimiento debían ser tomadas en consideración, pues no es lo mismo cumplir una pena en el penal cordillera que en la penitenciaría. El expresidente Sebastián Piñera tomó una decisión política al cerrar el penal Cordillera, no es lo mismo cumplir en Punta Peuco que en la calle 5 de la penitenciaria.

Hay condiciones estructurales que tener presente. Roxin señaló que si a alguien se lo condenaba a pasar dos semanas en las playas de Mallorca, no era pena, la pena debe tener un sentido de castigo, e idealmente iniciar un proceso para una efectiva rehabilitación.

Estimó que en esta discusión faltó recurrir a la criminología. En lo relevante, era la entidad del bien jurídico afectado lo que debía ser tenido en cuenta. No podía ser la misma solución para delitos diversos.

A su juicio, el decreto ley N°321 tiene un déficit estructural, y si el legislador asume una decisión porque determinada persona saldrá libre, y no asume lo demás, el debate en el Congreso no resultaba serio.

El asesor Cavada, por la Biblioteca del Congreso Nacional, refirió que el ‘Estudio sobre el diseño normativo e institucional para la implementación de jueces de penas y medidas de seguridad en Chile’[[4]](#footnote-4), surgió a propósito de un convenio entre la BCN y el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los temas de investigación, elegido por el senado, consistió en el tema de los jueces de ejecución de penas. Sobre el particular, él estuvo a cargo de la coordinación de ese trabajo con la UDP.

Señaló que el informe es de 2008. El contenido del informe es un estado de situación nacional, internacional, y una propuesta. Los puntos centrales planteados es que la función de los jueces de ejecución de penas debiesen radicarse en los jueces de garantía, modificando el Código Orgánico de Tribunales en la materia, pues los medios materiales están, y hacen una serie de estimaciones de población carcelaria, y presupuesto. La proyección se inicia el 2009, y se proyectó hasta el 2020.

Agregó que señala, el informe, que no existe información concordada y homogénea sobre los datos relevantes del caso en Gendarmería. No pudieron acceder a estadísticas de medidas de seguridad, y beneficias intra penitenciarios. En cuentas, fue un trabajo con bastante información a ciegas.

Lo relevante, subrayó, es que el informe terminó con tres talleres, dos entre académicos UDP y funcionarios del ministerio de Justicia (hoy de Justicia y Derechos Humanos), y otro con académicos de la UDP y jueces de garantía. Al final, ocurrió un ampliado con asistencia masiva.

Siendo que el informe hace una proyección al 2020, lo primero sería tratar de actualizar la información, tal cual propone el autor del informe. Así, se podría revisar si la proyección para el 2016 se cumplió, o fue desajustada, ya sea en cualquiera de los dos sentidos, y en base a eso, adecuar las proyecciones.

Hizo presente que los datos de Gendarmería de 2009 no tienen nada que ver con los datos vigentes, hoy la información que entrega Gendarmería es de mucha mejor calidad y accesibilidad, por lo que quizás el levantamiento de los datos no sea tan complejo.

El diputado Squella consultó sobre el aspecto presupuestario, si era de iniciativa presidencial.

El asesor Cavada señaló que sí, pero en la parte relevante, durante los talleres realizados con los jueces de garantía, estos señalaron que había carga ociosa, ellos señalan que necesitan entre 28 a 35 jueces.

El diputado Squella consultó si la Corte Suprema opinó el tema.

El asesor Cavada señaló que la Corte Suprema lo encontró fantástico, durante el seminario.

El diputado Soto consultó si en ese informe se plantea la libertad condicional como derecho o beneficio.

El asesor Cavada señaló que el informe lo plantea como un beneficio, subrayó que podría estar equivocado, pero no lo modifica, pero la cuestión –a su juicio- es que radica la vigilancia de la aplicación en los jueces de garantía, sacándolo de la administración.

El subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez Eytel, señaló que tal como planteó en unas sesiones anteriores, este boletín que nace por moción de senadores y que está en segundo trámite constitucional, tuvo presente la concesión por la Comisión de Libertad Condicional de una gran cantidad de libertades condicionales. El primer semestre de este año, se concedieron 2314 libertades condicionales en todo el país, mientras el año 2010 fueron 795. Ello generó un debate público sobre la peligrosidad de los destinatarios, y no solo el número de las libertades condicionales concedidas.

Los senadores Araya, de Urresti y Larraín presentaron esta moción, apoyada por el Ejecutivo, con indicaciones, que persigue modificar el decreto ley 321/1925, de acuerdo a los criterios criminológicos modernos. La cuestión es que los requisitos sean más objetivos y se cumpla la progresión de la pena.

Se incorpora que el penado debe estar haciendo uso de algún principio de salida, contar con un informe favorable de salida, elaborado por el centro penitenciario, y que dé cuenta de la situación de reincidencia.

Dicho informe debe contener los antecedentes sociales y características de personalidad del penado.

Esto concretiza, agregó, el principio de progresividad de la pena, se otorga mayor autonomía de modo progresivo para la reinserción social. La comisión debe tener en cuenta el daño generado con el delito. Respecto de los condenados por lesa humanidad y genocidio, el tiempo mínimo es dos tercios.

Además, esto se define como beneficio y no un derecho. En relación a los condenados con presidio perpetuo, una vez cumplidos 10 años, se eleva a 20 años, se endurecen los requisitos. Se aclara la composición de las Comisiones de Libertad Condicional, que hoy están compuestas por los visitadores carcelarios. La propuesta es que sea por ministro de corte y jueces de garantía, y no quedan integradas de forma tan variopinta. Respecto de la supervisión de quienes tienen el beneficio, se pasa de control administrativo a control por equipos multidisciplinarios de Gendarmería, se pasa de un control de forma a uno de fondo, con planes de intervención individual. Se otorga un plazo perentorio para informar a Comisión de Libertad Condicional del incumplimiento de estos planes de intervención individual, y de ser así, se revoca el permiso.

El proyecto se hace cargo de modificar una norma desactualizada, y que no contempla los avances de la criminología moderna. El año 2012, la modificación realizada al sistema eliminó al Seremi de la facultad decisoria, es sano que esto lo vean los jueces, pero efectivamente se tiene que atender al órgano encargado de la ejecución de la pena, que tiene elementos técnicos que deben ser tenidos en cuenta por la decisión judicial, pues tomando decisiones informadas estas son razonables. La libertad condicional es una herramienta adecuada para la reinserción social, y se fijan criterios hacia los tribunales de justicia, Comisiones de Libertad Condicional, para que estas sean decisiones razonables.

Para concluir, señaló, que en cuanto a la urgencia, el próximo periodo de libertades condicionales comienza el 1 de octubre, por lo tanto depende de todos los colegisladores la celeridad en estos procedimientos, evitando que se puedan conceder libertades condicionales que pudieran no corresponder, o que generaran situaciones de inseguridad en la ciudadanía. Entonces, es relevante dar la celeridad adecuada a este procedimiento.

Por su parte la **ministra de Justicia y Derechos Humanos,** señora Javiera Blanco Suárez**,** enfatizó que hay una discusión jurisprudencial sobre si las libertades condicionales son derecho o beneficio. La aplicación de una condena no genera ipso facto el derecho a un beneficio, los beneficios intrapenitenciarios se analizan en sede administrativa si se cumplen requisitos, pero no es algo connatural a haber sido condenado.

Hoy se deja establecido explícitamente el concepto de beneficio, que sea derecho es opinión que genera consecuencias, tales como que cualquier modificación posterior sería inoficiosa, porque la ley del momento de la condena fijaría el tema. Así, estas leyes serían inoficiosas, esto no es trivial, es una discusión que se da en sede judicial. Entonces, de los 5.600 casos que vendrán en octubre, que estarían en condiciones de cumplir con los requisitos para acceder a la libertad, si fuese un derecho, darían lo mismo las modificaciones propuestas. Pero al ser un beneficio, la cuestión es lo vigente al momento de la concesión del beneficio.

Sobre si la mejor es la sede judicial o administrativa, subrayó que esto sí tiene que estar en sede jurisdiccional, aunque entendía que tienen un carácter particular, son decisiones administrativas en sede judicial.

Lo tercero, la participación de Gendarmería. Acotó que había que hacer alusión a la calidad de los informes, a lo que se refirió el señor presidente de la Corte Suprema. Es factible mejorar en eso, y sería importante que el director se refiriese a ese proceso de modificación. Muchas veces no tendremos esa contradicción, que en sede judicial se otorgue beneficio a personas con informe desfavorable.

En realidad fueron más de 2.314 las personas a las que se concedió la libertad condicional, se llegó a cerca de 2.600. Esta reforma permitirá que lleguen a la Comision de Libertad Condicional los que tengan informe favorable de Gendarmería. Antes no era un requisito para optar, sino que solo se tenía a la vista al momento de decidir. Esto no es trivial por lo que pasó en Valparaíso y Santiago, pues hubo dos ministras que estimaron que los requisitos eran objetivos, y no los subjetivos planteados por Gendarmería. Así, los informes de Gendarmería pasarán a ser objetivos, pero no serán vinculantes. En la canasta, las Comisiones de Libertad Condicional podrán pronunciarse de modo favorable o en contra. Esos énfasis son importantes de destacar.

El señor **director de Gendarmería**, Jaime Rojas Flores, señaló, a propósito de lo planteado, que se está realizando una modificación en aspectos procedimentales, en materia de recursos humanos, procedimientos administrativos y elementos condicionantes de las funciones que cumplen los gendarmes.

Uno de ellos son las condiciones laborales, han ocurrido eventos trágicos de gendarmes que se han quitado la vida. Se está trabajando con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Fonasa y otros, para adecuar la situación laboral, mejorando el control horario y la distribución de personal, y en este caso cabe destacarlo.

La diputada señora **Turres** señaló que cabía hacer dos alcances. Respecto de lo que significa la libertad condicional, y de verlo hoy como un hecho administrativo, la libertad condicional obviamente es derecho penal, porque regula o se refiere al cumplimiento de la pena, es una forma de cumplir la pena, y está regulado en el Código Penal. Entonces, no entendía que se entienda como hecho administrativo si es forma de cumplir la pena. Solicitó una opinión para ahondar en el tema, pues no le calzaba.

Respecto de lo que se planteaba, sobre la aplicación de las normas distintas al momento de aplicar la sentencia, agregó que aunque se trate de libertad condicional, en este ámbito rige el principio pro reo, y hasta donde se sabe, si se dicta una norma beneficiosa para el condenado, la norma sí le beneficia, y si se dictan normas con efecto más gravoso, que rigidizan la obtención de la libertad condicional, para los que ya están condenados por hechos cometidos antes de la vigencia de la ley, no les podría afectar.

Esto al menos, en la época que estudió y trabajó en el tema, era un principio absoluto. La interpretación que se hace de que se trate de un hecho administrativo, y no dentro del proceso penal porque se establece una forma distintita de cumplir la pena, en cuanto a que es un medio de prueba, claramente de lo que se habla es de cumplimiento de la pena, que está dentro del ámbito penal, por lo que solicitó fundamentos fuertes de que hubo cambio de doctrina, o que en realidad se cambia lo planteado por la ley.

El diputado **Farcas** señaló que en base a lo expuesto por la ministra, queda la sensación que se cumple con el espíritu de aunar los intereses de las diversas iniciativas parlamentarias, para que la dación de este beneficio no sea mal utilizado. Incluso, se podría plantear algunos requisitos para delitos que no deberían tener acceso a beneficios.

El diputado **Rincón** estimó que la cuestión es de qué manera el sistema carcelario garantiza la reinserción. Hace años se pide la rehabilitación de los modules carcelarios de Rancagua, y se sabe que el tema está tirado, hasta el día de hoy la Cámara Chilena de la Construcción (en adelante ‘CChC’) pide acceder para dar trabajo.

Acá, señaló, hay normativas que se están sustituyendo, como aprender un oficio, si hubiere talleres donde cumplir la condena, pero se elimina algo que parece muy bien, como asistir a talleres de enseñanza, lo que está bien, pues el decreto ley N°321 dispone en relación al que no sabía leer y escribir, y discriminaba de tal manera.

Argumentó que no sabía si el ministerio se haría cargo del tema de rehabilitación y reinserción, pues el tema de fondo es cómo con esta celeridad se podría legislar correctamente. Acaso se pensó por un instante que lo ocurrido en Valparaíso es ilegal, y si acaso estaría instalada esa tesis en todo el resto del país, la cuestión es si se estimaba que esa jurisprudencia estaba instalada en todo el país.

El diputado señor **Soto** señaló que se está analizando la modificación de una ley muy antigua, que no guarda relación con los estándares de los beneficios carcelarios que deba tener el sistema hoy. Bastaba revisar el articulado, con un castellano antiguo. Le parecía que de modo correcto, había que vincular la libertad condicional con el comportamiento que debía tener el interno en el recinto carcelario, su buen comportamiento debiese ser tenido en cuenta, ello tiene sentido, es de justicia, y permite a Gendarmería administrar de mejor forma los recintos carcelarios. Ello se ve en los permisos de salida, que se van otorgando en la medida que los internos tengan buen comportamiento.

Hizo presente que la otra situación que se plantea como condicionante, es contar con un informe favorable de reinserción social, elaborado por un equipo multidisciplinario, que dé cuenta de si el interno tiene o no posibilidades de reinsertarse o de reincidir en la comisión de delitos.

A su juicio, estos son hechos necesarios de legislar, pero le preocupaba que para el otorgamiento de estos beneficios, estas dos situaciones dependan sólo de Gendarmería. Se ha planteado por los expositores que si solo una autoridad tiene esa potestad, sería casi juez y parte, y esa es una situación que no es deseable. Sería deseable que exista alguna forma de contrapeso, es correcto que Gendarmería tenga control, pero tendía el control de todo el proceso de reinserción.

Recordó que ha planteado cuestión sobre que se podría incentivar la corrupción. Se sabe que Gendarmería tiene procesos de corrupción, con el ingreso de diversos objetos a los penales, lo que genera distinciones al interior de los recintos. Entonces, la cuestión es cómo controlar que no se genere una situación abusiva o contraria a la probidad al interior de Gendarmería.

Si la libertad condicional es un beneficio que depende de la autoridad administrativa, aumentará la cantidad de condenados que no podrán salir por esta vía, y aumentará el hacinamiento o sobredotación carcelaria, que se tiene sobre todo en los recintos del área Metropolitana. En otras palabras, es una caldera que podrá explotar. El 2011 se volvió incontrolable la situación, ocurrió el incendio de la cárcel de San Miguel, y la pregunta es si acaso no se está volviendo a estar en esa situación, y que pueda generar nuevos problemas.

El diputado señor **Squella** señaló que, con mucha humildad, no cabía dejarse llevar en la legislación de un tema sensible, dejarse llevar por las coyunturas. Se planteaba que no se debía repetir la situación de abril, o la de un señor de apellido difícil de pronunciar, y plantear la discusión en esos términos era poco serio. Se estaba discutiendo un tema para que las personas tengan acceso al medio libre, y si se quiere ver las limitaciones, restringir la libertad debía ser una de las cuestiones más importantes en que se debía poner atención. Se debía analizar el tema y seria poco afortunado mezclarlo con la coyuntura. Entendía la contingencia de lo ocurrido en abril, pero cabía tomar postura y no simplemente dejarse llevar por la opinión pública, que un día quiere indulto para todos los presos, y al día siguiente quiere pena de muerte por los hurtos.

La cuestión es avanzar en una legislación que debe durar décadas. Reiteró, que con mucha humildad, había que poner un esfuerzo. La discusión sobre si es beneficio versus derecho, le sorprendía. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, se tuvo a la vista la opinión de órganos relevantes en el tema, y no siendo explícito, la mayoría de los casos le daban la naturaleza jurídica de derecho, la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública, los abogados que participaron, no recordaba que alguien lo haya planteado como beneficio, y el tema es relativo, pues si se cumplen los requisitos para acceder al beneficio, se tiene un derecho a acceder a él.

Si la cuestión es que se fija el tema al momento de la sentencia, ayuda a entender la discusión, pero cabía hace lo que correspondía. Si el día de mañana, acceden 5.000 persona, y accedieron porque cumplieron con lo dispuesto en la ley, no debía haber problema, y había que asumir los costos, y ser suficientemente serio para explicarlo, y si solo acceden 100 personas, bien también, porque sólo ellos cumplieron los requisitos.

No sabía si la palabra era ‘encantó’, pero lo planteado en la sesión anterior por Aldunate y Cavada, sobre que hay un trabajo que sitúa esto en el ámbito jurisdiccional, donde la Biblioteca del Congreso Nacional pagó para que se haga un trabajo profundo, incluso con articulado, como no tener a la vista eso. El Estado de Chile hizo un trabajo serio, que está en la línea con lo planteado, pero por despachar antes de octubre, estaremos a las carreras para que a una persona no se le aplique el sistema.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** señaló que respetando la urgencia planteada, obviamente la opinión pública tiene una concepción de que se liberaron personas que constituyen un peligro. Los estudios que nos han dado, sobre quienes obtienen la libertad condicional, es que reincide de modo menor en relación a quienes no se les dio. El estudio que se ha hecho, el 23,5% de quienes obtuvieron reincidieron, frente a un 58% de quienes no la obtuvieron. La libertad condicional demuestra que las personas a quienes se les ha dado tienen las características de reinserción social adecuadas.

Este debate, sobre la crítica a la dación del semestre pasado, es un debate no se ha enfrentado debidamente a la opinión pública. Se está sujeto a legislar a lo que opina la opinión pública, y eso es muy popular, pero en aras de la seriedad no se debe legislar en función de la percepción de la ciudadanía., y ese no debe ser el papel a cumplir como legislador, pues eso ha contribuido a desprestigiar al Congreso, pues se está legislando como si no tuvieran claro sobre lo que se debe legislar.

Está de acuerdo en el tema de lesa humanidad, de poner mayores exigencias, en tanto son delitos en que se debe hacer un cumplimiento mayor a lo habitual. En cuanto a si es beneficio o derecho, es un derecho, sino, para qué colocar requisitos, si el sujeto cumple todos los requisitos y no accede, no tiene sentido colocar requisitos, habría que plantearlo bajo otros términos. Esto es un derecho, si se está hablando que quede en sede judicial, la sede deberá analizar bien si se cumplen los requisitos y actuar conforme si es o no un derecho.

A su juicio la libertad condicional es una herramienta para la reinserción, pero las cárceles en Chile no tienen la suficiente implementación para lograr la reinserción, solo sirven para tenerlos encerrados. No estaba de acuerdo con la opinión ciudadana de que debe estar todo el tiempo encerrados, estaría de acuerdo si hubiera un ambiente para lograr la reinserción, pero lamentablemente el país no se preocupó del sistema carcelario y el rol que desempeña para combatir la delincuencia, que es una labor importante.

Tal como se planteó, subrayó, no se ha ido al fondo de la materia, y este texto que hay y el que se modifica, no da una solución integral a la materia. Se debió ir hacia un sistema de jueces de ejecución de penas. Frente a todas estas señales, y que en el fondo se actúa sobre la base de que hay mucha facilidad para otorgar libertades condicionales, los jueces se sentirán inhibidos para otorgar las libertades, pues el proyecto nace a raíz de la crítica en el otorgamiento, entonces, ya sea que se mejore el sistema, que se supone que la Comisión de Libertad Condicional estará mejor compuesta, estarán inhibidos de otorgar las libertades condicionales.

Finalmente, manifestó que cabía tener en cuenta que hay estudios claros de que en Gendarmería, en lo que significa la dación de permisos, ha tenido criterios cambiantes, no ha tendido una línea clara, ha sido poco objetiva.

El diputado señor **Trisotti** señaló que el tema del primer semestre llamó a la preocupación, y llenó páginas en los medios de comunicación, a juicio de muchos, por la desmedida dación de libertad condicional. Pero tenía dos consideraciones, la situación que se enfrentó en su minuto, y lo planteado por las diversas instituciones. El gobierno declaró en su minuto que esto fue una situación grave, a las pocas horas el poder judicial señaló que los jueces se basan en informes técnicos que emanan de Gendarmería, y hoy si bien la discusión se ha planteado si acaso es un derecho o un beneficio, le preocupaba que en un inicio, o más bien el elemento que debe ser considerado por los jueces, emana de la propia Gendarmería, la Comisión de Libertad Condicional debe tener a la vista el informe para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Posteriormente, cuando haya sido otorgada la libertad condicional, se disponen una serie de medidas que deben ser también cumplidas por Gendarmería, se habla de un plan de intervención individual, al menos un contacto mensual, un plan individual de reinserción, y su preocupación es que esto no tiene un informe presupuestario, y su pregunta es si hoy dada la presión, los problemas que se tiene de parte de muchos de los funcionarios de gendarmería, en particular de la planta 3, la cuestión es si se tiene el número, las capacidades para generar los informes, para crear los criterios objetivos, y si a posteriori, se tendrá la capacidad para hacer los seguimientos. En cuentas, si están los fondos, capacidades, recurso humano.

El diputado **Farcas** señaló que cabía hacerse cargo de algunas cosas. En cuanto a la literatura comparada, y en eso la Comisión de Seguridad Ciudadana fue exhaustiva, era cierto que en la medida que se tenga más restricciones y se ponen más trabas a las personas para acceder a esto, denominado filosóficamente derecho, la herramienta mejoraba en su finalidad. Entonces, la cuestión es qué medidas se adoptan al efecto, y este proyecto va en el sentido correcto, pues se entrega a esta institución esta atribución dotándola de los recursos adecuados para hacer esta gestión.

Es cierto, acotó, que existe una deuda en el tema, nadie queda insensible al visitar la situación de las cárceles, pero no por ello se puede paralizar la discusión, se tiene que legislar por la convicción y no solo por la representación, y el tema de la seguridad ciudadana es un tema de preocupación de la ciudadanía.

Cuando la herramienta se aplica correctamente, y cuando no se hace, se puede ver que tanto en Valparaíso y todo el país hubo casos de reincidencia, ya casi tenemos, a pocos meses tenemos la misma tasa de reincidencia que debió ser a nivel nacional, entonces el criterio aplicado en esa ocasión no fue el correcto.

Como lo planteó el diputado Ceroni, hay que entregar el beneficio a las personas que cumplen los requisitos, y para ello es relevante que se tenga un diagnóstico de la persona para que se pueda reinsertar. Había que decirlo, no hace bien a la ciudadanía, a la percepción de seguridad que tiene, ni al aliento favorable a crear una sociedad de reinserción, ni a esa persona, otorgarle un beneficio cuando no está preparada, se le hace un perjuicio, pues no está preparada y volverá a reincidir.

Con el convencimiento de que se debe representar, a pesar de lo urgente, concordaba con la ministra en la necesidad de despachar esto prontamente. Finalmente, estimó que Gendarmería tenía la robustez para evitar la potencial manipulación o mal uso por la existencia de incentivos perversos. Había que confiar en que se usaría de modo correcto la atribución otorgada.

La señora **ministra** **de Justicia y Derechos Humanos**, señaló que el debate era relevante. Claramente no se puede legislar para la contingencia, el Ministerio trabajó en la creación de esta moción desde el 18 de mayo de este año. Surgió por la inquietud del otorgamiento de las libertades condicionales el primer semestre, pero se han dado un tiempo para analizar, para el enriquecimiento de ambas mociones, e independiente de que exista una contingencia, es una realidad, no es una moción discutida en un plazo corto. Hay una norma que data de 1925, cuando ni siquiera se hablaba de penas sustitutivas, pero se tuvo tiempo para trabajar con académicos, funcionarios de gendarmería, etc.

En cuanto a la naturaleza jurídica de un acto administrativo en sede judicial, o la naturaleza de la libertad condicional como derecho o beneficio. Una cosa que no se puede asumir es que la libertad condicional sea una herramienta para combatir el hacinamiento. No se puede ocupar una herramienta de este tipo para tener más o menos gente en las cárceles. El hacinamiento requiere otra herramientas, tales como la facilitación de la construcción de cárceles que dio la agenda corta.

Hizo presente que el hacinamiento a nivel nacional es bajo, 4%, pero es dispar a nivel regional. Entonces, si se tiene espacio en Aysén, no es llegar y llevar a un condenado de Santiago para allá. Se han planteado traslados voluntarios en las cárceles clásicas, Metropolitana, Valparaíso y Biobío. El hacinamiento se combate con otras alternativas.

Era convencida de que la libertad condicional es un beneficio. El concepto de derecho, el *aprobation* norteamericano, es parte del cumplimiento de la pena, en la parte final, todos pasan a *aprobation* allá, pero no es así en el sistema chileno. En Chile no existen delitos inexcarcelables. Eso se discutió mucho a propósito de los de lesa humanidad, las organizaciones de derechos humanos están claras en que no se puede privar, transformar en inexcarcelable, se pueden subir los requisitos, pero no no excarcelar.

Sobre qué es lo que se ha querido hacer mediante la incorporación de requisitos. Si esto solo fuera el cumplimiento de requisitos dispuesto en la ley, se transformaría esto en una decisión administrativa, y no es la idea, no se ha hecho nunca.

Entonces, la discusión aquí habida, ocurre en dos niveles o sentidos. El otorgamiento define que es un beneficio, pues hay una discrecionalidad la que opera, pero igualmente la podría denegar.

Lo otro relevante de aclarar, es que la norma es bien confusa, se habla de que es un medio de prueba, una recompensa. Acá se avanza, pero se aclara en que es un beneficio, y se entendería como derecho en tanto existe el derecho a solicitarlo, pero claramente, cumpliendo los requisitos no es efectivo que se accederá al beneficio.

En 1925 sólo existía el decreto ley 321, en cambio hoy existe una canasta de alternativas, rebajas de condena, beneficios intrapenitenciarios, las libertades condicionales, y lo que se debe buscar es darle al conjunto de alternativas, una racionalidad en el cumplimiento de la pena.

Está de acuerdo en que hay un desafío como país hacia una ley de ejecución de penas, donde todo se pueda homogeneizar, pues hoy solo se puede administrativamente darle racionalidad al sistema.

Si se quiere progresividad, se debe dar permisos previos para acceder a la libertad condicional. Se debe lograr que la libertad sea una herramienta útil para la reinserción y rehabilitación. El cómo lograr ello, el tema aquí y en todas partes, es un desafío. El tema de control se ha antepuesto a los temas de rehabilitación, es un desafío mayúsculo. No se puede hablar en términos generales de rehabilitación, no es lo mismo un joven con consumo abusivo de drogas, que un homicida o monrrero. Un alcoholizado que en un momento de poco control de impulso, en un arrebato mata, pudo tener un trabajo, tener clara la distinción de bien y mal, y puede tener una rehabilitación mejor que alguien que roba permanentemente.

Lo mismo los condenados por delitos sexuales. No tiene nada que ver su situación con los homicidas o jóvenes que cometen delito por consumo abusivo de drogas, los compromisos de salud mental deben ser tenidos en cuenta. La primera respuesta es que no se puede tener un plan único de acción, se debe tener una clasificación por nivel de peligrosidad, y lo otro es conocer cuál es el plan de rehabilitación concreto. Se busca estandarizarlo, pues se ha aplicado de modo desigual. Si se sabe qué problema tiene, se debe segmentar para tratarlo y dar una oferta adecuada.

Lo que sí logra el proyecto es la progresividad, que es clave. Se ve siempre la acción de los servicios como compartimentos estancos, donde siempre se parte de cero, cuando la cuestión es transitar a una suerte de *Noms*(National Offender Management Service), bajo cuya lógica existe una cadena de información, una suerte de carpetas médicas, se accede a la información con todas las intervenciones tenidas con el sujeto. Eso ayuda mucho, porque la libertad condicional debe ser un beneficio para quienes ya han accedido a beneficios intrapenitenciarios, y de ser así, son personas que tendrán niveles de reincidencia bajísimo, que estarán en un franco nivel de baja peligrosidad. Así, seguirán cumpliendo pena, pero de una manera distinta.

El **subsecretario** **de** **Justicia** señalo sobre la naturaleza jurídica de la resolución que concede o deniega la libertad condicional, que efectivamente hay fallos de la Corte Suprema (rol 39.379-2014) que señalan que es una acto administrativo que emana del poder judicial. Esto es una materia que es bien dudosa, de hecho tuvo que estudiarla para entenderla correctamente cuando comenzó este debate. La modificación del 2012, al ver el informe de Constitución del Senado, para ver los quorum, se resolvió que era ley simple ya que no era una cuestión sobre organización o atribución de los tribunales de justicia.

Estimó necesario aclarar algo. El que sea acto administrativo, no significa que no deba estar fundado, ni que no sea derecho penal. Se debe cumplir con las garantías del debido proceso y la ejecución de la pena. En esta materia, la regulación central está en el decreto supremo 518, que otorgaba inicialmente la custodia de los penados al Patronato Nacional de Reos, hoy a Gendarmería.

Que esto sea considerado un beneficio, transparenta los criterios que se tienen para acceder a la libertad condicional. Los requisitos deben ser claros, pero ello no obsta a su carácter de beneficio.

Estaba de acuerdo en que no se puede legislar por la mera sensación pública, pero también era relevante atenderlas. Una de las cosas que no quedaron claras era que las normas no eran suficientemente claras para la dación de las libertades condicionales. Los análisis de las comisiones, de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, y de Constitución del Senado, es que es perfectible el sistema. El año 2012 hubo un avance importante al trasladar desde la Seremi a al sistema judicial el tema, pero se debía avanzar en la información que se debe tener a la vista.

Por último, se pasa del mero control administrativo a los planes de intervención individual. No es lo mismo el caso de un homicidio, donde el motivado por futilidad tiene bajo nivel de reincidencia, frente a una persona que vive de los delitos contra la propiedad. Ello debe ser analizado por los órganos técnicos de Gendarmería. Este proyecto no solo pone énfasis en que se atiendan a los informes de Gendarmería, sino que se asume un compromiso de generación de planes de seguimientos a las personas a quienes se otorgó la libertad condicional.

El **director de Gendarmería** señaló que la institución ha sido el servicio menos presente en la discusión sobre seguridad ciudadana. Estar acá era positivo, y se está aprovechando la ocasión. Señaló que con la CChC ya se firmó un convenio para que entren donde sea posible y den trabajo. Asimismo, se están celebrando convenios de formación de técnicos en uso de energía, para así trabajar con generadoras y distribuidoras de energía.

Pero había que distinguir entre un recinto tradicional, donde se pueden celebrar este tipo de convenios, de los concesionados, donde se tienen los contratos y una imposibilidad, pues ellos no permiten intervenir en sus espacios de control. Quizás habría que revisar en el tema, ese es el caso particular de Rancagua, y se está tratando de resolver el uso inadecuado de los espacios.

Se tiene la obligación de apuntar a todos los esfuerzos a espacios de transparencia y probidad. Así, ser un instituto más profesionalizado y que genere informes, permitirá disminuir esa sensación y elevar los estándares en el tema. En materia de homogeneidad de los informes, es un tema interno, se tendrá en cuenta para que no haya diferencias entre regiones.

Cabía tener presente que Gendarmería hizo un informe que daba cuenta que no se requieren nuevos recursos para la aplicación de la presente ley. Respecto de nuevas modificaciones habría que hacerse cargo, pero dada la reorganización interna, no se requieren nuevos recursos, pero sí se debe dar cuenta que una materia pendiente en presupuesto, es el tema de mantención de recintos penitenciarios. No es materia de este proyecto de ley, pero es algo que debe tenerse presente, ha estado ausente en el debate. Pero en la elaboración y seguimiento de los informes, ello está cubierto.

La diputada **Turres** manifestó que deseaba dejar expresamente expuesto, que no obstante la referencia a la sentencia de la Corte Suprema sobre la naturaleza administrativa del acto, se han presentado una serie de acciones de amparo en la materia sobre delitos que desde el año 2009 son conocidos como de lesa humanidad o genocidio en el país. Así, en roles 16042-2016, 16550 y 781, donde la Corte Suprema argumentando la comisión que otorga las libertades condicionales, sobre el carácter discrecional, si opera automáticamente y a todo evento, se debía ponderar caso a caso si el interno se ha rehabilitado o no.

Pero en estos y otros fallos, la Corte Suprema señala que la libertad condicional es un derecho que la ley reconoce para quienes cumplan los requisitos dispuestos en la ley. La autoridad no puede cuestionar la procedencia si se cumplen los requisitos, pues tal decisión carece de fundamento, y deviene ilegal. La Corte reitera ese criterio en otros fallos.

Consultó de qué manera se vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que los Estados se comprometen a respetar los derechos dispuestos en ese pacto. El Estado de Chile, a través de esta legislación podría entenderse que viola ese pacto, porque el Estado debe adoptar medidas legislativas para hacer efecticos los derechos que dispone ese pacto. Una serie de normas se encontrarían vulneradas por esa legislación.

Hizo presente el informe N°11 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre beneficios carcelarios, y en ningún caso se prescinde de acceder a tales beneficios s todos los condenados, lo que se exige es la imposición de las sanciones que en derecho correspondan.

En algunos casos el derecho se interpreta de modo político y sesgado, y ello causa dolor a muchísimas personas. Eso es indudable, y solicitó pronunciamiento del Ejecutivo. Todos quedaron asombrados por las libertades condicionales otorgadas el primer semestre, pero este proyecto tiene nombre, varios plantearon que la urgencia de la tramitación era el riesgo de que alguien condenado por violaciones a los derechos humanos pudiera salir en libertad condicional, específicamente Krassnoff. No veía por donde él podría salir, pero no se podía legislar pensando en temas particulares, se debía buscar un equilibrio entre la justicia y los derechos de las personas condenadas en el país.

Finalizó señalando que una sentencia, donde se concibe la libertad condicional como acto administrativo, cuando en otros casos se dictamina contra las Comisiones de Libertad Condicional porque se han vulnerado derechos constitucionales, podría entenderse como una interpretación antojadiza. No correspondía aquí interpretar estas normas de modo arbitrario. Desde que se entra a estudiar derecho, la ley es igual para todos, y no veía como habría normas distintas para que la ley fuese para unos y no para otros.

El diputado **Rincón** solicitó que Gendarmería informase cuando abogaría por Rancagua, pero cuando en forma concreta el tema sea realidad. Los temas contractuales lleva escuchándolos seis años. Ya hubo reuniones, visitas, y siempre se alude al tema contractual. Desconocía quien era la supravoluntad para que esa siempre sea la respuesta. Si hay problemas contractuales, ello se soluciona modificando los contratos. Ese espacio no se pensó para ninguna otra cosa que no sea taller de trabajo.

Pidió que le perdonaran la parodia, pero la respuesta sobre los contratos es permanente, se sabe que la situación de esos talleres es crítica, se plantean unos convenios con la CChC, pero ello en qué se traduce, en que no pueden entrar. Pidió una respuesta en la materia, pues este proyecto coloca más requisitos para la dación de las libertades condicionales, la que se tornará no flexible, más rígida, habrá que acreditar de mejor forma los requisitos, pero para llegar a eso lo relevante es el trabajo interno, pues nadie ingresa y pretende optar a un beneficio. Entonces, el tema es como se solucionará el tema en forma concreta.

El diputado **Gutiérrez** señalo que toda esta discusión surge a propósito de la decisión de las Comisiones de Libertad Condicional de otorgar, supuestamente, libertades condicionales en exceso, más allá de lo que contemplaba aparentemente la ley, y se ha cuestionado ese otorgamiento. No se dio en el contexto de las peticiones del *Fanta*, de Krassnoff, no fue ese el contexto. Era importante contextualizar el tema, si no, se daría una discusión que no era central, el tema era la coherencia.

La idea fundamental del proyecto de Seguridad Ciudadana plantea que si el informe es negativo, ni siquiera va a la Comisión de Seguridad Ciudadana, no alcanza a ser nada. Que se cite fallos de la Corte Suprema considerándolo derecho cuando esa propuesta la reduce a nada, todos son abogados en esta Sala, no resolvía el tema, pues recordó un seminario donde se planteó que el 90% de las normas jurídicas provienen del ámbito administrativo, y quien no lo asume, se olvida del ABC del derecho, solo el 10% es creación legislativa. No cabía hacer mofa de que el acto administrativo es irrelevante, esto ocurre todos los días.

Lo que le preocupaba era el tema de los delitos contra la humanidad, pues había que recordar que la jurisprudencia de la Corte interamericana plantea que la pena siempre debe ser íntegra en estos casos, ese es el ABC, si alguien fue condenado a 40 años, o 400 años, deberá cumplirlos todos, eso es lo que la Corte resolvió, que nos obliga incluso sobre las decisiones de la Corte Suprema, y por qué, porque se está en presencia de un delito de lesa humanidad, y no cabía olvidar que la ley puede discriminar, pues lo prohibido es que la discriminación sea arbitraria, que no es el caso…

Señaló, además, que la Corte Suprema criticó algunos informes pues parecían formularios, parecía que eran al voleo, y es una crítica dura, no podía haber informes estandarizados. Podía que fuera cierto, que ninguno de esos internos se arrepiente, quizás alguno se arrepiente, pero todos los informes son idénticos, y la Corte Suprema hizo el punto, y era atendible.

Señaló que en Alto Hospicio, la mitad de los internos son imputados, pues ahora hasta los hurtos reiterados tienen pena efectiva, y los jueces estiman que la libertad condicional sirve para evitar el hacinamiento. Ese pensamiento no era incorrecto, pues se pensó la reforma procesal para que los presos no fuesen imputados, sino condenados, y se está llegando por agendas cortas al mismo resultado previo a la reforma procesal.

Sometido a votación general, se aprobó (10-0-0) con el voto afirmativo de la diputada Turres, y los diputados Ceroni, Coloma, Gutiérrez, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti.

2.- Discusión Particular.

Epígrafe

*“Artículo único.- Reemplázase el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados, por el siguiente texto:*

*“Ley que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad”.”*

Vuestra Comisión, producto de la aprobación del artículo 10 nuevo, lo ha reemplazado por el siguiente:

Artículo único.- Se establece la siguiente Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

“Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad.

Artículo 1°

*Artículo 1°.- Se establece la libertad condicional como un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, se encuentra en proceso de intervención para la reinserción social.*

*La libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en esta ley y en el reglamento respectivo.*

La diputada **Turres** señaló que el artículo alude a la ley y al reglamento respectivo. Consultó sobre el reglamento.

El asesor del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Germán Welsch, señaló que se estaba trabajando en un nuevo reglamento, el que no tuvo cambios ni siquiera con la modificación del 2012. Por ello, en los artículos finales se dispone un plazo de seis meses para realizar las modificaciones pertinentes.

 Sometido a votación se aprobó por nueve votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Cornejo, Rincón, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 2°

*Artículo 2°.- Toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:*

*1° Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si la persona condenada estuviere privada de libertad cumpliendo dos o más penas, o si durante el cumplimiento de éstas se le impusiere una nueva, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la condena impuesta para estos efectos. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;*

*2° Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota “muy buena”, de conformidad al reglamento de esta ley, en los cuatro bimestres anteriores a su postulación. En caso que la condena impuesta no excediere de quinientos cuarenta y un días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los tres bimestres anteriores a su postulación;*

*3° Haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y*

*4° Contar con un informe favorable de reinserción social elaborado por un equipo profesional idóneo del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra la persona condenada, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada.*

Numerales 1° y 2°

 Sometido a votación se aprobó por doce votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Numeral 3°

El diputado **Ceroni (presidente)** señaló sobre el numeral 3°, que se deja establecido que como es un requisito el que hayan sido otorgados permisos de salida ordinaria, y esos los concede estrictamente Gendarmería, y es un antecedentes que las Comisiones de Libertad Condicional deben tener en consideración, puede ser que el afectado tenga derecho a ese beneficio, y de esa manera, teniendo presente que el juez de garantía está a cargo de la ejecución de la pena o medidas de seguridad, lo que se propone es que sea ante él quien se puede recurrir. En cuentas, que tenga alguna posibilidad aquel a quien no se le otorguen beneficios, relevante para acceder a lo futuro a la libertad condicional, teniendo en cuenta que es gendarmería el que otorga estos permisos, y donde resulta que hoy son cosas muy a criterio de ellos, pueda reclamar.

La segunda parte alude a la situación de quienes son condenados a penas bajas, y como se piden una serie de condiciones, como el tener cumplidos algunos bimestres, es tan estrecho el plazo que la persona casi va a cumplir la condena ante de poder acceder a la libertad condicional. Cabía imaginar en una pena de 540 días, son delitos menores, por ello a esos casos no se debe pedir ese requisito.

El diputado **Squella** señaló que estaba de acuerdo con la indicación, sigue lo planteado por los expositores, es atendible, pero el tema era de ubicación en el texto. Le daba la impresión que en otras circunstancias también se podría recurrir al juez de garantía, por ejemplo, en el N°4, cuando no se ha dictado un informe, sería atendible que se pueda recurrir al juez. Quizás convendría tenerlo presente.

Lo segundo, el tema del último inciso de su indicación, sobre grado mínimo, se había dicho que la libertad condicional es, tratándose de penas menores de un año, en términos prácticos no se daría pues la ley requiere que la pena sea superior a un año.

El diputado **Ceroni (presidente)** señaló que la cuestión es que no se exija el permiso para acceder a la Comisión de Libertad Condicional, pues la condena puede ser mayora un año, como en los 540 días.

El diputado **Squella** señaló que sacaría la primera parte del inciso, y la dejaría al final del artículo 2°.

El diputado **Cornejo** señaló que con la indicación del diputado Ceroni, se puede recurrir al tribunal de garantía, pero hay que agregar que se puede recurrir cuando se tiene una decisión negativa. En cuanto al informe favorable, el tema es que puede haber una demora. Una cosa es negar un informe, y otra cosa es demorarlo.

El asesor **Mery** señaló que era fácil imaginarse como ocurriría la audiencia, pero no en cambio quien sería el legitimado para asistir a ella, quizás Gendarmería, pero quien más.

El diputado **Ceroni (presidente)** señaló que bastaban las reglas generales, comparecerá el Ministerio Público, el defensor, el imputado, la víctima, y en este caso, Gendarmería.

El diputado **Soto** consultó si era razonable colocar un plazo, con el objeto que se consoliden las situaciones en una época determinada y no dejar esto pendiente.

El **subsecretario de Justicia** señaló que es un aporte la indicación, pero le preocupaba el tema de la admisibilidad, pues esto podría involucrar recursos fiscales, y eventuales recursos hacia los tribunales de justicia.

El asesor **Welsch** señaló que los permisos de salida, como están planteados en el reglamento, la concesión y suspensión se deciden previo informe favorable del Consejo Técnico. Cuando Gendarmería decide una o dos veces al mes sobre los permisos de salida, si hay una negativa, es porque el sujeto no tiene avances, y al comunicarse la negativa, se le informa la razón, ya sea por faltas en los talleres de educación, de trabajo, etc.

Ahora, la carga de trabajo tanto para Gendarmería o tribunales, es porque en definitiva se generarán audiencias por las negativas, lo que implicará trasladar a los internos hacia tribunales, a una audiencia ante un juez de garantía no especializado en estos temas, que no conoce la materia, por lo que es un esquema complejo. No teniendo jueces especializados de ejecución, no es posible sin más validar esta situación.

El asesor **Geisse** señaló que el art. 2° es difícil examinarlo requisito por requisito, es una concatenación que debe examinarse en su conjunto. El tiempo tiene sus propias reglas, otro es el de buena conducta, tres o cuatro bimestres, y otro, es el informe, que es una especie de pronóstico. Esto es una concatenación, donde uno de los más discutidos ha sido el permiso de salida, y la única voz que al final decide, es la de Gendarmería. Así, siendo el permiso de salida donde hay mayor control de Gendarmería, es lógico que haya una ventana para que se pueda recurrir al juez de garantía.

Estimó que esta indicación es admisible. El artículo 76 de la Constitución Política dispone la facultad de los tribunales de mandar a hacer ejecutar lo juzgado, el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales también se refiere al tema, y el 10 y 34 del Código Procesal Penal, sobre cautela de garantías sobre el poder coercitivo de los jueces de garantía. Asimismo, se ha citado el 476, sobre procedimiento. En cuentas, las facultades ya están dispuestas, los jueces de garantía son los jueces de ejecución en Chile.

Sobre el cumplimiento hacia las personas que cumplen hasta 540 días, son 18 meses. Tienen la posibilidad de solicitar el permiso a la mitad del cumplimiento. Tiene que haber cumplido tres bimestres de buena conducta, tiene que ser evaluado sicológica y socialmente, el permiso de salida tiene que haber sido concedido por el tribunal de conducta, y demostrar durante el ejercicio del permiso de salida buena conducta, entonces, en la práctica aquellos que cumplen 540 días, quizás hasta los de 3 años, no tienen ninguna posibilidad de acceder a la libertad condicional, porque sus tiempos no da.

Le parecían indicaciones aceptables. La cuestión es que el interno pueda ser oído, pues luego de la cadena de requisitos, se pide que Gendarmería elabore un informe, y no se permite a la Comisión de Libertad Condicional conocer cuando no es favorable, cosa que debería ser en la medida en que el interesado haya podido cuestionar tal carácter. Si no, mejor dejar todo en las manos de Gendarmería.

El asesor **Aldunate** señaló que el tema de la discusión de admisibilidad no tiene asidero. El artículo 14 literal f) del Código Orgánico de Tribunales ya dispone la competencia para la ejecución, el juez de garantía ya tiene esa competencia. En ese contexto, hay proposiciones que se refieren a ese punto, podría requerirse la opinión de la Corte Suprema, porque se modificarían atribuciones, pero ya están ahí.

Acá se ha planteado cuestión sobre las indicaciones, respecto de la totalidad del proyecto. Entendía que la disposición del diputado Rincón era así, la propuesta recogía lo que es favorable del Senado, con la diferencia, que donde habla de la comisión, lo atribuye a la judicatura, y hace una remisión a un procedimiento que se crea al final de la indicación.

En otra materia, a propósito de lo planteado con antelación, si resulta que los jueces de garantía no son especializados en materia de ejecución, ese argumento se derrota a sí mismo, pues entonces la Corte Suprema no es especializada, pero se le atribuye competencia para pronunciarse sobre los condenados a presidio perpetuo calificado, y resultaría que se valida el terminar con las Comisiones de Libertad Condicional, pues si están integrado por jueces de garantía, las Comisiones de Libertad Condicional funcionan con gente que no está capacitada, y ahí está el punto que tiene que resolver esta Comisión.

El diputado **Gutiérrez** señaló que el permiso de salida podría ser el único requisito que existiese. Si para acceder a él, hay que tener buena conducta y progresos, lo que se está haciendo es en buena cuenta reiterar tales requisitos. Cuando Gendarmería evaluó, parecía que sin ese requisito, nada vale, entonces, ese es el único requisito a cumplir, porque lo demás parece que estaría subsumido en este.

La cuestión es que no hay una forma de quitar validez a tal decisión, ese permiso será clave, sin este permiso, no se podrá acceder a nada, y si los permisos se conceden cada dos meses, esto no es más que darle pega a los abogados, porque a quien no le den permiso, buscará abogados para obtenerlos. Esto abre una posibilidad, esto judicializará el sistema, esto será trabajo feliz para los abogados.

El diputado **Ceroni (presidente)** señaló que en primer lugar, toda persona tiene derecho a reclamar de los actos administrativos, y no por eso había que temer de los reclamos. Pero además, obligaba a Gendarmería a ser más cuidadosa, meticulosa en tales procedimientos, y los va a negar cuando no corresponda. Los detenidos no reclamarán si no tienen ningún fundamento.

El diputado **Rincón** señaló que habría que adoptar un procedimiento expreso en cuanto a su indicación, toda vez que al atribuir la decisión sobre las libertades condicionales a los jueces de garantía, cuestión en que estuvo de acuerdo incluso la Corte, pero siguen las diversas propuesta que se han hecho, y que Secretaría con la premura del tiempo ha informado en el comparado, pero si se sigue esa relación se terminará aprobando una propuesta mixta, pero contradictoria.

La esencia de su propuesta está en la creación de un nuevo párrafo en el Código Procesal Penal. Solicitó analizar la manera en que se tratará la discusión, si no, se producirá una contradicción en todo. Su propuesta es radicar el tema en los juzgados de garantía. La alternativa, es seguir con el tema en las Comisiones de Libertad Condicional. Se debía adoptar una decisión, pues no puede ocurrir que ambos sean competentes.

El diputado **Ceroni (presidente)** señaló que recién se ve el tema, donde todo se radica en el juez de garantía. Había dos posibilidades, o las comisiones o los jueces.

La **ministra** señaló que entendía que hoy para el país es necesario tener una ley de ejecución de penas, pero eso está más allá de la idea matriz que tiene el proyecto. Se debían medir los impactos que tal propuesta tiene, pero responsablemente, implicaba un presupuesto distinto, y una idea matriz distinta.

El diputado señor Ceroni presentó **indicación** al numeral 3° del artículo 2° del siguiente tenor:

*“Para añadir el siguiente párrafo al numeral 3° del artículo 2°:*

*No se exigirá este requisito para los postulantes cuya condena impuesta, según lo dispuesto en el numeral primero, sea igual o inferior a 540 días.”*

Sometido a votación se aprobó por diez votos a favor, de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Sabag, Saldívar, Soto y Squella, ninguno en contra y la abstención del diputado señor Rincón.

Numeral 4°

La **ministra** señaló que era tremendamente importante avanzar hacia una ley de ejecución de penas, pero que eso excede la idea matriz, y también los impactos presupuestarios que pudieran tener.

Subrayó que se plantea, por algunos, abrir la compuerta, la posibilidad de que decisiones en sede administrativa de Gendarmería sean revisadas, lo que podría ser saludable en términos sociales, pero que amerita un estudio mayor a lo que se plantea acá.

Los beneficios intrapenitenciarios otorgados podrían ser miles, pero sanciones por inconductas cuando se generan castigos, por aislamientos, las visitas, *venusterio*, cualquier tipo de decisión administrativa que pueda ser recurrible y superaba los mil al año. Desde la defensoría también se requiere un estudio, pues se deberá hacer un estudio sobre carga de trabajo.

Entiende la necesidad e importancia, que correspondía hacer el esfuerzo, y que esto no era algo nuevo, había propuestas que quizás –a su juicio- se podrían exponer, que es un poco lo que se hizo con la ley de responsabilidad penal adolescente. Estimó que debía escucharse a la academia, se crearon en algunos países jueces de ejecución que no han tenido el éxito esperado, se podría convocar a académicos de la universidad Diego Portales, hay varias preguntas previas que contestar, antes de decidir volver procedente el recurrir este tipo de decisiones en una instancia jurisdiccional. Quizás, habría que dejar estas indicaciones para un análisis de esa naturaleza.

El diputado señor **Rincón** señaló que veía complicado al Ejecutivo con la indicación, pues podrían estar incluso los votos para aprobarla. La Defensoría se abrió a estudiar el tema, y por lo tanto, esto debiese ser parte de este estudio. Si el Ejecutivo se allanara a instituir una comisión de trabajo en el tema, con integrante de esta Comisión, y que en particular se contemple el proyecto inocentes de la Defensoría, para el estudio de cargas y el modelamiento de los procesos, si es así, retiraría la indicación, con esas condiciones.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** señaló que uno es el tema de estudio de carga, que se somete a aprobación, y otra cosa es el proyecto que podría presentarse nuevo, distinto, sobre ejecución de penas. No tenía sentido un estudio de cargas sobre lo que irrogaría esto, pues implicaría que el proyecto quedaría paralizado. Entonces, dado que el diputado Rincón retiraría su propuesta, es que el gobierno se abre a estudiar un nuevo proyecto, que sea atingente.

La **ministra de Justicia** señaló que ese sería el compromiso, hay proyectos de ley bastante avanzados, hay uno de la época del ministerio de Soledad Alvear, hay por lo menos tres iniciativas en el tema, incluso con articulado. Pero quería ser enfática que son proyectos que irrogan gastos, pues afectan la orgánica de tribunales. Algunas propuestas crean jueces de ejecución, otras entregan tal función a los jueces de garantía. Eso podría plantearse y las estimaciones de impacto informarse para iniciar un posterior debate.

El diputado señor **Monckeberg, don Cristian** señaló que los diversos ministros de Justicia han hecho grandes promesas, pero no se avanza. Ahí está la reforma a la justicia civil, o el nuevo código penal, etc., que siguen trancados. Estimó que la propuesta del diputado Rincón era radical, al hueso, pero si el diputado Rincón la retiraba, incluso la habría suscrito, habría que estarse a ello. Pero era relevante aprobar la propuesta del diputado Ceroni, era un avance. Si la cuestión era evitar que una persona específica salga en libertad, no tenía mucho sentido legislar.

Ya se sabía lo que iba a pasar, se diría que para implementar este nuevo sistema no hay dinero, y no lo decía por este gobierno, pues estas son transformaciones bastante profundas y que no han resultado varias, no son temas entretenidos, no venden en la opinión pública. En tal sentido, no es que no le creyera a la ministra, pero no había que engañarse entre los integrantes de la comisión.

Al menos, argumentó, avanzaría en la propuesta del diputado Ceroni.

El diputado señor **Gutiérrez** señaló que al igual que el diputado Monckeberg, habría apoyado lo planteado por el diputado el diputado Rincón, y lo de Ceroni. Quizás resultaría conveniente que alguien pueda recurrir por la negativa de la libertad condicional, pero no por el permiso, pues eso se ve mucho durante todo el año. Por último, si los requisitos serán tan restrictivos, mejor recurrir de la negativa de la libertad condicional y no si se concedió o no un permiso dominical. El punto medio pasaría por lo que propuso el diputado Rincón, porque en cuentas, los requisitos de los permisos intrapenitenciarios, y de la libertad condicional, eran bastante parecidos.

El diputado señor **Farcas** señaló que tenía la convicción de que se apuntaba a algo necesario y correcto, pero se debía hacer lo posible, y por los motivos conversados, que 5.000 personas podrían quedar en libertad condicional si no se despachaba este proyecto prontamente. Había que, obviamente, creer en lo que la ministra decía, no tenía ninguna razón para no creer en ella.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** estimó que se ha complejizado la materia. Dado el compromiso de la ministra, también retiraría su indicación para que en un nuevo proyecto, se trate esa materia.

El diputado **Gutiérrez** señaló que era mejor trasladarla, no retirarla.

La **ministra de Justicia y Derechos Humanos** señaló que en caso de perseverar en la indicación, la propuesta en el artículo 5° sobre recurrir de la decisión negativa a la libertad condicional, se debería hacer en corte de apelaciones, no en garantía, pues la Comisión de Libertad Condicional está integrada por ministros de Corte, no debiese ser conocida por garantía.

El asesor **Geisse** señaló que en la Comisión de Seguridad Ciudadana ya se había planteado el tema, primero impugnando ante la Corte Suprema, y luego ante la Corte de Apelaciones. Pero esto está relacionado con el resto de los requisitos, que en cuentas es definir qué es lo que va a llegar a la Comisión de Libertad Condicional, y que es lo que se va a recurrir a la Corte. Entonces, la cuestión es lo que llegará, si estará o no tan restringido, si lo que llegaría a la Comisión de Libertad Condicional permitirá que se pueda decidir algo, eso sería coordinado y lógico.

El diputado señor **Rincón** consultó sobre la integración de las Comisiones de Libertad Condicional, al integrar por ministro de Corte no preestablece que sea el ministro visitador de cárceles. Entonces, por qué hacer esa distinción, y no dejar a quien ya tiene una expertiz previa.

El diputado señor **Squella** consultó cuantas de estas negativas de la libertad condicional llegan a impugnarse en recursos de amparo o protección.

La **ministra de Justicia y Derechos Humanos** señaló que no tenían esos datos, pero podrían remitirse. Crear esta reclamación sería una suerte de tercera acción.

El diputado **Squella** señaló que al haber un recurso específico, debiese reducirse la cantidad de impugnaciones en acción de protección, aunque la carga debería mantenerse.

El diputado **Rincón** señaló que el representante de la Corte en la Comisión de Libertad Condicional podría ser el visitador de la cárcel, ellos tienen experiencia en el tema.

La **ministra de Justicia y Derechos Humanos** señaló sobre la integración, señaló que es un tema debatible. Parte de esto, es verdad, tienen el tema de la especialidad, pero también de incorporar diversas visiones. Entendía que no necesariamente se mantendría una línea, pero la cuestión es que no todas tienen los mismos criterios, la Metropolitana y la de la V región no son iguales que en el sur, y que los integrantes no sean algo fijo, le parecía que le daba cierto grado de mayor libertad al no radicarlo en actores específicos. Entendía que es un debate que se podía dar, pero prefería un ministro de corte y cuatro jueces de garantía, para que vayan rotando.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** señaló que había que tomar decisiones, frente a un no otorgamiento de permisos, se ha propuesto que se acote el reclamo por la negativa de la libertad condicional…

La diputada señora **Turres** señaló que dejar esto solo por la libertad condicional, y existiendo el requisito de las salidas, y que eso solo quede en manos de Gendarmería, seguían sin una suerte de debido proceso, para que los interesados puedan revisar su situación. Hasta hoy se puede pedir la libertad condicional, y alguien se juega todos sus cartuchos en esa solicitud, pero hoy se pone un requisito adicional para solicitarlo, y eso es solo resuelto por Gendarmería. Podía haber cierto grado de arbitrio, y no se está permitiendo una revisión. Por ello, le gustaba su indicación.

El diputado señor **Squella** señaló que al revisar los requisitos para la libertad condicional, uno de los requisitos tiene que ver con los permisos intrapenitenciarios, por lo que le hacía sentido lo planteado por el diputado Gutiérrez, sobre que los requisitos de las libertades y los intrapenitenciarios son los mismos. Dicho eso, el debate de la mañana, si acaso esto es beneficio o derecho, si se plantea la vía judicial, es claro que es un derecho, pues ellos revisarán si se otorga, en tanto se cumplan los requisitos.

El diputado señor Ceroni presentó indicación al numeral 4° del artículo 2° para eliminar la palabra “favorable”.

Puesta en votación fue rechazada por cinco votos a favor, de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Monckeberg, don Cristian, y Squella, cinco votos en contra, de los diputados señores Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Rincón, Sabag y Soto, y las abstenciones de los diputados señores Saldívar y Trisotti.

Sometido a votación el numeral 4° se aprobó por diez votos a favor, de los diputados señores Coloma, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y la abstención de la diputada señora Turres y del diputado señor Ceroni.

**Artículo 3°**

*Artículo 3°.- Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.*

*Las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los condenados conforme a la ley Nº 20.357, que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hayan cumplido dos tercios de la pena.*

*Asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de catorce años, infanticidio, y los delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.*

*Las personas condenadas a dos o más penas, cuya suma alcance o supere los cuarenta años de privación de libertad, sólo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido veinte años de reclusión. En caso de concederse, el período de supervisión a que se refiere el artículo 6° se extenderá hasta cumplir cuarenta años contados desde el inicio de la condena.*

*Las personas condenadas por los delitos de hurto o estafa a cumplir una pena de más de seis años podrán postular sólo una vez que hayan cumplido tres años de su condena.*

*Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, podrán postular a este beneficio sólo una vez que hayan cumplido dos tercios de la condena.*

*Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad y, además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido diez años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban, en forma previa, una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.*

Incisos 1 y 2

Sometidos a votación se aprobaron por diez votos a favor, de las diputadas señoras Turres y Vallejo –en reemplazo del señor Gutiérrez, don Hugo-, y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti.

Incisos 3 y 4 nuevo

El diputado señor **Soto** señaló que el proyecto persigue regular los requisitos para la dación de libertades condicionales, pero del universo de condenados que existen, resulta que no son todos iguales, hay un listado importante de condenados que provienen de lo que se ha denominado violaciones a los derechos humanos en Chile. Son personas que han cometido un conjunto de acciones vinculadas al terrorismo de Estado, que actuaron en un periodo concreto, excepcional, de anormalidad constitucional. En ese período no rigió el Estado de derecho, no hubo un poder judicial que garantizara los derechos de las personas.

Los informes Rettig y Valech fueron iniciativas para cuantificar el daño causado. Alrededor de 35.000 personas fueron afectadas, 28.000 fueron torturados, 3197 muertos, 2095 ejecutados de modo extrajudicial, en fin. Los tribunales han ido condenado a los autores con posterioridad. Se mencionó a Krassnoff, y hay varios en la misma condición. Si se está revisando el sistema, se debía atender a este tipo de delincuentes o reos por violaciones a los derechos humanos, y resulta que esos delincuentes vinculados a genocidios debiesen tener un tratamiento especial, y la propuesta es que no tengan acceso a la libertad condicional y cumplan íntegramente la pena a la que fueron condenados.

La idea, agregó, es que de no hacerlo, pueden existir altos grados de impunidad, el mejor caso es Krassnoff, no quería acotar el debate a él, pero servía para ejemplificar la situación. No se puede estar condenado a 300 años, pero a los diez poder postular a la libertad condicional. La retribución, el castigo que funda las penas deviene ilusoria con esta posibilidad.

Así, la indicación busca circunscribir esto estableciendo dos condiciones, el plazo de comisión del hecho, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que los condenados hayan actuado como agentes del estado o con aquiescencia de este. Estas dos condiciones permiten acotar la improcedencia de la libertad condicional.

Si hay algún matiz, o cuestionamiento jurídico, solicitó darle la palabra a al asesor Enrique Aldunate. Estimó que como Comisión no podía obviarse que los condenados no son todos iguales, algunos son por delitos de lesa humanidad, y otra es la delincuencia común, y esta propuesta distingue el tratamiento que se debe dar a cada uno de ellos.

La diputada señora **Turres** señalo que se oponía categóricamente a esta indicación, pues acá hay razones jurídicas e históricas que justifican su decisión, este es un momento importante de nuestra historia, y esta no es la forma de abordarlo…

Acotó que esta norma es inconstitucional, porque transgrede la igualdad ante la ley. En algún momento de nuestra historia, algunos sectores la van cambiando y plantead que un día 11 de septiembre las fuerzas armadas, y de orden y seguridad, se levantaron con ánimo de hacerse del poder, y masacraron el país sin razón de ser y desde la nada. Nadie podía justificar las violaciones a los derechos humanos, nadie podía justificar la tortura, los desaparecidos, pero hace 43 años el mundo no era el mismo, y Chile no era el mismo. Existía el muro de Berlín, y esto separaba incluso a las familias en un Chile diferente. No se podía juzgar, en democracia, que tenemos crisis pero estamos mejor, con esa misma vara a esa época.

Agregó que muchos países han sido capaces de sancionar estos hechos, pero también dar vuelta la hoja y mirar al futuro. Esta indicación afecta esa realidad y principios jurídicos, como el pro reo. Se sabía que en causas que se han investigados violaciones a los derechos humanos, algunas están bien tramitadas, pero en otras se ha hecho una interpretación de la ley absolutamente torcida. El hecho que no se otorgue libertad provisional a personas que tendrán una pena baja, el hecho que no se les otorgue beneficios intrapenitenciarios, aun cumpliendo con los requisitos.

Eran casos concretos. Estaba hablando de un soldado que se le ordenó formar parte de un pelotón de fusilamiento, se preguntó si tuvo alguna posibilidad de decir que no, había que atenerse a los hechos, o de un oficial al que se le ordenó sacar a Berrios de Chile, quien dos años después murió, y hoy ese oficial está cumpliendo condena.

Lo dice, subrayó, con respeto a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. A nadie le gusta que eso haya pasado, pero el afán de venganza no puede seguir rigiendo los destinos de nuestro país, Chile no puede seguir teniendo a tantas familias sufriendo y aumentando el dolor.

Refirió que días atrás hubo una ceremonia religiosa en su zona, donde participaron víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares de personas que están en Punta Peuco, quienes fueron capaces de estar uno junto a otro, tener un momento humano, y que esto solo muestra este odio. Se preguntó qué sentido tiene, tener a un anciano de 80 años preso, si acaso eso es justicia o es venganza.

Estimó que lo que se ha presentado en esta indicación es inconstitucional, haría la reserva de constitucionalidad como correspondía, pero llamaba a una reflexión para efectos de mirar hacia adelante, cabía abrir el corazón y tener voluntad de buscar algo distinto, pues este tipo de normas quizás haga quedar bien con algún sector del país, pero no hacía bien.

El diputado señor **Squella** señaló, sobre la perspectiva técnica, que la Ministra de Justicia había planteado que no había delitos inexcarcelables. La Defensoría Penal dijo lo mismo, los penalistas hacían una distinción entre una pena alternativa y el régimen de la libertad condicional, y obviamente apuntando en que se podía hacer una diferencia alguna, incluso la fiscalía planteó que no se podía distinguir por la gravedad para el momento del otorgamiento de la libertad condicional. Similar idea había planteado la fundación Paz Ciudadana.

Entonces, no tenía recuerdo que alguien haya sido partidario de distinguir entre delitos sujetos a libertad condicional, y no, no hay, el debate era si se podía distinguir entre la gravedad y los requisitos a exigir, y la mayoría de los expositores plantearon que no. Independiente que el decreto ley N°321 hace una distinción por dos tercios o cantidad de años, o la confrontación de uno y otro, ya hay jurisprudencia a que no haya distinción alguna.

Agregó que entiende el afán de hacer un punto político, y hacer un guiño a cierto segmento de la población marcada por una etapa de la historia como planteó la diputada Turres, pero a propósito de lo señalado cuando se ingresó la discusión inmediata, la cuestión es legislar por la seriedad, pues los puntos políticos se hacen en el hall El Pensador, y no al momento de definir el contenido para que una persona pueda optar a la libertad condicional.

Se podía hacer el punto del hombre del apellido difícil, pero esta legislación debía durar décadas. Ellos morirán luego, los congresistas también pasarán, pero sí tuvieron a la vista una coyuntura puntual quedará una legislación injusta, y habrá pasado la coyuntura, los legisladores estarán para esa época en otra cosa, y lo único que esto logrará es que se pondrá en jaque al gobierno, pues la ministra no se desdecirá, y los diputados oficialistas tendrán que tomar una decisión.

Hoy lo aconsejable, a su juicio, es lo sugerido por parte del gobierno, y se enfrenta a los que quieren hacer un punto político, pero estimó que ello era mejor hacerlo frente a las cámaras en El Pensador y no es un texto que debe regir hacia adelante. Al margen de los cuestionamientos constitucionales, la cuestión es no tensionar, que la indicación se retire, por poner en problemas a sus propios compañeros, y perseverar en el despacho.

El diputado señor **Rincón** señaló que no podía no manifestar, que no compartía ni podía compartir la explicación de contexto histórico para pretender que a lo menos ellos, si no justifica, permite entender. Ello no se justifica ni permite entender, y por lo tanto, partiendo de esa base, y en el contexto de lo planteado por el diputado Squella, ello permite objetivar una discusión jurídica que debía tenerla. Estimó que la solución propuesta por el Senado ya establecía una requisito mayor en forma expresa y clara en el caso de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra, está en la norma claramente instalada en los comprados.

Manifestó, que no firmó la indicación por esa razón, y porque además, en su redacción, con respeto a los firmantes, podría desmenuzarse ciertas falencias si se analiza en particular. Por ejemplo, por qué la violación estará excluida en los requisitos mayores como si fuese una conducta punible de menor entidad que la detención ilegal. Como en el contexto de esa indicación, sabiendo que mujeres padecieron violaciones, como podría la violación tener un desvalor menor que una detención ilegal. Con todo respeto, la indicación tiene falencias. Pero independientemente de ello, lo planteado por el Senado, con dos tercios de la pena y no la mitad, y expresamente para estos delitos, era una solución adecuada en el contexto de esta discusión.

El diputado señaló **Farcas** señaló que firmó la indicación porque es un tema complejo, doloroso, y se debe tener una línea divisoria y radical entre lo que son los delitos y crímenes que se ha dedicado a perseguir de una forma no compartida por los partidarios de su coalición. Pero perseveraría en ello, pues las victimas debían ser las protegidas y no los derechos de los delincuentes.

Se presentó la indicación, pues hay una distinción significativa entre lo que son los delitos del monopolio del uso de la fuerza y lesa humanidad, a partir de lo que es tener al Estado detrás de cada una de esas atrocidades. Por eso, al tratar el tema, había que tener una perspectiva histórica, de futuro porque se legisla no solo con la intención de dar una señal a los que han cometido los crímenes, sino como algo que no puede repetirse.

Lo que hizo el Senado, finalizó, es una legislación que contribuye y va en el sentido correcto. Lo que busca es marcar una línea divisoria entre lo que son los delitos perpetrados normalmente, que hay que perseguirlos con la máxima dureza, y los cometidos por agentes del Estado donde la víctima no podía acceder a ningún sistema de justicia. La indicación es importante y significativa, y no buscaba el odio ni fomentar determinadas ganancias políticas. Las acciones en materia de delincuencia no traen réditos, pero se debía ser coherente con lo que se piensa.

El asesor **Aldunate** señaló que debían decantarse algunas cuestiones en el asunto. En primer término, no se podía prescindir del contexto histórico, más allá de la situación de Chile y recordar a Eric Hobsbawn, quien ha planteado que el siglo XX ha sido el siglo de las masacres. Eso sirve para contextualizar el debate, y la posición que se debía adoptar en situaciones de criminalidad. Ahí el holocausto en el régimen nazi, se podía criticar las prácticas de la Unión Soviética en los gulags, y esa posición está fijada en la declaración de derechos humanos, y se debía tomar una posición.

Ahí la criminología ha tomado posición sobre los crímenes de Estado, y ello no ha estado en el foco de atención. En los medios es una situación que pasa desapercibida. Alguien ironizó que un perro que muere en la calle llama a la compasión, pero la muerte de 6 millones de judíos solo produjo una conmoción moderada. Se puede que ver en ese contexto, el crimen de Estado ha estado en situación difusa.

La regla que se propone se hace cargo de un especial ámbito de criminalidad en un tiempo determinado. En Chile masacres han existido varias, el Estado no tiene las manos limpias en masacres a seres humanos. En el ámbito, se plantea una regla especial, por una parte, la distinción por criminalidad de Estado, o particulares que actúan con la aquiescencia del Estado. Se debía adoptar una decisión que no contaminara el debate, si las reglas requieren una distinción hay que hacerlo. Si se revisa, hasta la ley de tránsito tiene una regla especial, el terrorismo tiene un periodo de tiempo, no es una novedad en la legislación, el inciso final vigente tiene un periodo de comisión. En ese contexto se plantea la regla, selecciona los delitos que son objeto de condena.

En cuanto al delito de violación, entendía que lo planteado ocurrió, pero desconocía si eso se condenó efectivamente con el delito de violación. Si existiere un caso como ese, tendría una situación de concurso, violación con homicidio, pero lo que resulta acreditado es el delito base. Se han seleccionado esos delitos por la forma como estaba vigente el Código Penal a la época de los hecho. Tuvo a la vista la edición de 1974, y en ella están en ese tipo de denominaciones.

Sabía que el derecho penal chileno se construye sobre una farsa, con penas altas, pero resulta que el legislador después se arrepiente y dispone más de 10 procedimientos alternativos para antes de la condena o post condena. En ese contexto se planteaba la discusión.

Además, se dispone una regla especial, que podría ser revisada, y esa regla existe en el derecho comparado, y alude a los casos en que se dictaron autoamnistías, como en el caso argentino, donde se dictaron tal tipo de normas y la Corte Suprema anuló las leyes de impunidad, y se tuvo que hacer cargo con una regla como esta de esas situaciones. A renglón seguido, la regla se hace cargo de la ley N°20.357, legislación que puso las cosas en el congelador, pues aplica solo a lo futuro, pero agregando que la persecución de esos delitos no prescribirá nunca, y eso distingue totalmente entre la criminalidad del Estado y la común. Esto no significa un aumento de pena, acá se ha respetado en principio de legalidad, pues el tipo ya estaba dispuesto, y ello no se altera en este caso.

El asesor **Mery** señaló que la aproximación que se puede tener al punto puede ser diversa y es reconocible que el tema es polémico en nuestra historia. Pero ese era un tema pantanoso, por lo que prefería referirse al proyecto en concreto. La indicación agrega tres incisos, y alude al artículo 18 del Código Penal, que tiene referencia a la ley penal más favorable. Estimó que convendría que los autores explicaran por qué una norma que desarrolla un contenido pro reo, constitucional, no debiese ser aplicable en esta reforma.

Otro punto es que al variar el criterio del Senado, se impide el otorgamiento de estos beneficios. No haría argumentaciones, ya se ha dicho sobre el igual tratamiento que se debe dar a todos, y no si acaso estamos hablando de posible impunidad o no. El juzgamiento de hechos acaecidos entre 1973 y 1990, obligaba a reconocer que el Estado de Chile ha resuelto estos temas en virtud de los tratados de derecho humanos, y así, hay una jurisprudencia continua de no aplicación de amnistía y prescripción, y ninguno de esos criterios está en este proyecto.

Para no confundir, en Chile no se favorece la situación de impunidad, pues el otorgamiento de la libertad condicional no es sino una forma de cumplir la pena. A los autores de ciertos y determinados delitos, a los singularizados, delitos atroces sin duda, se les quería privar de esta posibilidad, pero había que ver que ello mismo da cuenta que no existe impunidad.

Entonces, la cuestión es si existen razones suficientes para que un segmento que cumple los requisitos, no pueda acceder a la libertad condicional, más allá de si es beneficio o derecho, a cumplir la pena en condiciones determinadas por el haber participado en estos hechos, si es una diferencia razonable. Esa es una cuestión que debía deliberarse a esta sede.

Recordó que no es Chile el único país que ha debido someterse a este tipo de discusiones. En Alemania, en 1990, Erich Honecker fue juzgado, y el juzgamiento fue paralizado porque el Estado de derecho debía reconocerle derechos, conservaba su dignidad al igual que a todos los ciudadanos. Eso se recopiló en un texto que se publicó en la universidad de Notre Dame, que pondría a disposición de la Comisión[[5]](#footnote-5). El juicio a Honecker es un criterio que debe tenerse presente, y en virtud de conciencia adoptar una decisión. Cuando se habla de esta materia, el tema de la impunidad debe reconocer que hay personas que han sido efectivamente condenadas y están cumpliendo condena. Denegar la posibilidad de plano a acceder a beneficios de esta naturaleza, debía analizarse cuidadosamente.

El diputado señor **Ceroni (presidente)** estimó que se ve este proyecto en un espíritu de poder lograr que la pena se cumpla de manera distinta. La libertad condicional es una manera de cumplir la pena, no se trata que se esté dejando impune a quienes han cometido delitos, o sin sanción. Pero lo considera con espíritu de aplicarlo a los delitos comunes, y lo que se plantea en esta indicación, se refiere a agentes del Estado que han cometido una vulneración a los derechos humanos, pero no una simple, sino una brutal, y que ha sido agentes del Estado causando tormentos, abusando de todo el poder que tenía el Estado, y con toda la indefensión hacia las víctimas.

Compartía la indicación, pero le asaltaba la duda sobre no aplicar el artículo 18 del Código Penal, pues es el tema de la ley más favorable para el reo, pero en definitiva, tenía dudas al respecto. Con todo, él no estaba disponible para dar la libertad condicional a quienes cometieron estos delitos de modo tan brutal, pues debían cumplir la sanción completa.

El diputado señor **Rincón** consultó al asesor Aldunate si podía referirse, dado que la afirmación sobre la violación, que él mismo señaló, quizás no se acreditó en sede judicial, pero en términos concretos era claro que hubo mujeres que fueron violadas, y lo que se planteó es que el que no haya una sentencia, no haría procedente la norma, pero mañana sí podría existir esa sentencia.

Consultó cuál sería el contexto de la detención ilegal, que no implicó desaparición o muerte, qué haría justificable que ese desvalor menor frente a un homicidio o violación, deba tener un tratamiento diferente.

El diputado señor **Sabag** señaló que quienes han cometido estos delitos deben cumplir en su integridad la pena, pero no es humano que quien tiene 90 años, muera en la cárcel. En principio no debía darse la libertad condicional, excepto en los casos en que tenga una situación incompatible con la vida, le queda poco tiempo de vida, está en etapa terminal de una enfermedad, sería una forma de tratamiento humanitario desde el Estado. Estimó que el Estado debía tener un estatus moral superior al de las personas, y que a la indicación se le agregara que la persona, si no tiene una salud compatible, debiese acceder a la libertad condicional.

El asesor **Aldunate** señaló que esto debe retrotraer a Chile al principio de las investigaciones en la materia, a la evolución de la jurisprudencia de los tribunales. En una primera etapa, en ese contexto hubo una etapa en que muchos de los procesamientos no llegaban a sentencia, y solo con la detención de general Pinochet cambió tal situación. De igual manera, la integración de la Corte Suprema por Enrique Cury, significó que la ley de amnistía se dejase de aplicar.

Recordó un fallo significativo el 1998, sobre detención ilegal, la desaparición forzada de personas tiene de fundamento típico en la detención ilegal o el secuestro, y en tanto la doctrina estimó que estos eran delitos permanentes, se investiga todo porque el hecho se sigue cometiendo.

Asimismo, que la desaparición de personas tendría su origen en un decreto del régimen nazi, el decreto ‘noche y niebla’, donde se ordenaba no entregar noticias del paradero de la víctima, pues de informarse donde se encontraban los cuerpos de los asesinados, ello daría pábulo para que los familiares fueran a dar tributo al lugar donde se encontraban los cuerpos. Esa realidad la vivió América Latina, y los tipos penales, al no existir el caso específico de desaparición forzada, hubo de adecuar las figuras de la detención ilegal y el secuestro, un delito que significa la privación de la libertad un instante siquiera.

Hizo presente que la violación ya está sujeta a regla especial en materia de procedencia de la libertad condicional, y en cuanto a lo planteado por el diputado Sabag, en términos humanitarios cabía plantearse el tema, pero no es una cuestión antojadiza que tengan un tratamiento diferenciado. Antes no hubo ninguna posibilidad de investigar y condenar, y eventualmente se han dado indultos polémicos, pero esta vía de salida se puede plantear, quizás, en un estatuto especial, pero había que atender que el estándar internacional requiere del condenado un reconocimiento del hecho, como en la regla que aplica al terrorismo, donde se pide una renuncia expresa al terrorismo.

El diputado señor **Rincón** señaló que el asesor Aldunate podía generar convicción, él señaló que hay un estatuto especial en materia de violación, esbozó que podría permitirse la aplicación de la libertad condicional cumpliendo requisitos mayores, y dada la norma que se propone, que son dos cosas, es la supresión total de la libertad condicional, no hay más libertad condicional hacia ellos, pero además, se elimina el principio del in dubio pro reo. Había que hacerse cargo de los dos elementos, pues ello trae consecuencias complejas, pues esta norma traería la imposibilidad de aplicación de ello a quienes se regula especialmente, pero generaría la inquietud en una interpretación a contrario sensu.

Manifestó estar llano a la iniciativa, en la medida que las situaciones son significativas. Siendo bastante acertado el razonamiento, dada la gravedad del contexto que se impone, no se entendería que pudieran generarse distinciones o vacíos por hipótesis que asumen la ausencia de fallo expreso en época pretérita, pero contingente a lo futuro.

La **ministra de Justicia y Derechos Humanos** señaló que había varios alcances que hacer a la norma. El Ejecutivo planteó una idea, la moción es de autoría de senadores, pero era claro que la discusión no estaba cerrada, no era efectivo que no haya posibilidades de ser mejorada. Esta discusión se dio en el Senado, y la conclusión a la que se llegó, es que tanto los beneficios como la libertad condicional son una forma de cumplimiento de la pena. Lo que se había señalado en instancia internacionales, en la Corte Penal Internacional era la no procedencia del cumplimiento total de la pena sobre lograr acortarla, pero no entendiendo que los beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional no fueran una forma no de no cumplimiento.

La doctrina internacional lo que ha planteado es el establecimiento de estándares de cumplimiento mucho mayores, en Chile ello está en el reglamento, en cuanto quienes fuesen sancionados por delitos de lesa humanidad deberán arrepentirse eficazmente y apoyar la investigación para acceder a los beneficios. Una buena parte de quienes están en Punta Peuco no podrían acceder porque no se han arrepentido ni colaborado en las investigaciones, por lo que podría ser un requisito a cumplir en relación a delitos futuros. Esa fue la fórmula que se encontró, esa fue la discusión que se tuvo.

Lo otro, es que dentro de las exigencias de la Corte Penal Internacional, sobre cumplimiento a cabalidad de la pena, estaba la imprescriptibilidad y no amnistiar estos delitos, y lo que se está haciendo es una reforma en el Senado sobre el carácter inamnistiable e imprescriptible de estos hechos.

Compartía con el diputado Rincón la inquietud sobre la incorporación del principio in dubio pro reo en la indicación, pues si se excluye para delitos específicos, se permitiría para los demás, y ello deviene en letra muerta este proyecto.

Finalmente, estimó necesario que la redacción se adecuase a aquella planteada para la tipificación de la tortura, podrían estandarizarse los conceptos.

El diputado señor **Soto** estimó inaceptable que quienes han sido condenados por estos delitos, puedan en poco tiempo acceder a beneficios. De esto tenían que hacerse cargo, tanto hacia lo futuro, impidiendo el acceso a estos beneficios, pero también del pasado, no se podía ocultar el hecho bajo la alfombra, y por las razones que se han planteado, no deberían acceder a estos beneficios. Ellos han ocultado antecedentes, no informan el paradero de las víctimas, no tienen clara conciencia sobre el mal causado, no podía darse un beneficio a quienes actúan tan distinto.

Los diputados señores Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Saldívar y Soto, presentaron indicación para reemplazar el inciso tercero e incorporar un inciso cuarto nuevo, del siguiente tenor:

*“A las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, si concurren las siguientes circunstancias:*

1. *Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.*
2. *Que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o un particular que actuó en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación del funcionario.*

 *A las personas condenadas por los delitos comprendidos en la ley N° 20.357 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional.”*

Puesta en votación la indicación se aprobó por siete votos a favor, de la diputada señora Vallejo –en reemplazo del diputado señor Gutiérrez, don Hugo- y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Rincón, Sabag, Saldívar y Soto, cinco votos en contra, de la diputada señora Turres y de los diputados señores Coloma, Monckeberg, don Cristian, Squella y Trisotti, y ninguna abstención.

Inciso 4 (que pasa a ser 5)

La Comisión recibió indicaciones:

* De los diputados señores Farcas, Saldívar, Silber y Soto, para intercalar entre las palabras “parricidio” y “homicidio calificado” las palabra “femicidio”, y para eliminar la frase “de persona menor de catorce años”.
* Del diputado señor Rincón para intercalar entre las palabras “policías” y “y de Gendarmería de Chile” la frase “de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile”.

Puestas en votación, en forma conjunta, se aprobaron por diez votos a favor, de las diputadas señoras Turres y Vallejo –en reemplazo del señor Gutiérrez, don Hugo-, y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti.

Incisos 5, 6, 7 y 8 (que pasan a ser 6, 7, 8 y 9)

Sometidos a votación se aprobaron por diez votos a favor, de las diputadas señoras Turres y Vallejo –en reemplazo del señor Gutiérrez, don Hugo-, y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti.

Indicación para incorporar un inciso final nuevo al artículo 3°

Los diputados señores Sabag y Squella presentaron indicación para agregar un inciso final nuevo al artículo 3° del siguiente tenor:

*“Con todo, las personas condenadas y privadas de libertad mayores de 75 años, y que padezcan una enfermedad terminal, cumplirán la pena en arresto domiciliario total.”*

Puesta en votación la indicación fue aprobada por seis votos a favor, de la diputada Turres y de los diputados señores Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Squella y Trisotti, cinco en contra, de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Saldívar y Soto.

Artículo 4°

*“La libertad condicional se concederá por resolución de una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario en el que se encuentre recluida la persona condenada. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, en la forma que determine el reglamento respectivo.*

*Cada Comisión de Libertad Condicional estará integrada por:*

*a) Un Ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho Ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte.*

*b) Cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.*

*Será Secretario de la Comisión de Libertad Condicional el funcionario que designe la Corte de Apelaciones respectiva.*

*Los jueces elegidos serán subrogados, en caso de impedimento o licencia, por los otros jueces con competencia en lo criminal en orden decreciente conforme a la votación obtenida. El empate se resolverá mediante sorteo.*

*La Comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los dos meses siguientes a los indicados en el inciso primero.”*

 Los diputados señores Farcas, Saldívar, Silber y Soto presentaron indicación para *intercalar* *en su inciso primero, entre las palabras “concederá” y “por resolución” la frase “o rechazará”, y entre las palabras “resolución” y “de una Comisión de Libertad Condicional” la palabra “fundada”.*

 Sometido a votación el artículo con la indicación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 5°

*“La libertad condicional se concederá o rechazará mediante resolución fundada de la Comisión de Libertad Condicional y se revocará del mismo modo.*

*La Comisión deberá constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, para lo cual se tendrán a la vista los antecedentes emanados del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario, y todos los demás que la Comisión considere necesarios para mejor resolver.*

*Junto con la constatación anterior, para efectos de la concesión o rechazo de la libertad condicional, la Comisión deberá considerar la gravedad del delito por el cual la persona fue condenada y la extensión del mal causado.*

*En todo caso, tratándose de personas condenadas a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida, rechazada o revocada por el Pleno de la Corte Suprema, previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo precedente.*

*La resolución que conceda, rechace o revoque la libertad condicional en el caso establecido en el inciso precedente se comunicará a la Comisión respectiva, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 6° de la presente ley.”*

 Sometido a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Indicación para incorporar un artículo 6° nuevo

 Vuestra Comisión recibió una indicación de los diputados señoresCeroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, y Monckeberg, don Cristian, para incorporar un artículo 6° nuevo al texto aprobado por el Senado, del siguiente tenor:

 **“***Artículo 6°.- La persona condenada a quien se le hubiese negado la libertad condicional, podrá reclamar de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que previamente deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica.*

 *La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución administrativa que niega la solicitud de la persona condenada.*

 *El tribunal rechazará de plano el recurso si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el inciso primero.”*

 Sometido a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 6° (que pasa a ser 7°)

*“Las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de Gendarmería de Chile.*

*Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la libertad condicional, la institución deberá elaborar un plan de intervención individual para la persona condenada, de acuerdo a su perfil, el que deberá comprender reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales, la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o intervención especializada.*

*Asimismo, la persona condenada deberá firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de su plan, las que se deberán expresar en el citado documento.”*

El diputado **Rincón** señaló que los planes de intervención deben estar antes de la dación de la libertad condicional, es de mínima lógica, todo se inicia con la apertura de un expediente, no es que la Comisión de Libertad Condicional se reúna y le llegó un papel. Se abre un expediente para que esa Comisión se pronuncie, y lo mínimo es que, más allá de las particularidades, a lo menos se debe considerar por Gendarmería que los planes se elaboren antes, pues de lo contrario, quizás pasen 30 días y no hayan planes de intervención.

Sometido a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 7° (que pasa a ser 8°)

*“Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de cinco días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional.*

*En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en esta ley.”*

Sometido a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 8° (que pasa a ser 9°)

*“Las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional, que hubieren cumplido la mitad de esta pena y las condiciones establecidas en su plan de seguimiento e intervención individual, tendrán derecho a que, por medio de una resolución de la respectiva Comisión de Libertad Condicional, se les conceda la libertad completa.”*

El diputado **Squella** señaló que la redacción del vigente decreto ley N°321 es más clara.

El diputado Rincón señaló que no es por agravar el hecho, pero nuevamente este cumplimiento estará asociado a un plan de intervención. Lo mínimo es que ese plan esté, no puede quedar que el plan no esté, o se retrase su existencia y se ponga en cuestión la situación de quien tiene el beneficio. De este tema debía hacerse cargo el Ejecutivo, que está aumentando los requisitos para tener acceso a la libertad condicional, que en su opinión no es derecho ni beneficio, sino una forma de cumplimiento de la pena, donde el sujeto podría verse expuesto a una situación de revocación por incumplimiento, pero no hubiera ningún tipo de exigencia en términos de creación del plan, más que este debía estar elaborado en un plazo exiguo, 15 días. El Ejecutivo debiese hacerse cargo del tema.

Vuestra Comisión recibió indicación de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, para reemplazar en el artículo 8° la frase “de esta pena” por la frase “del período de ésta.”

Sometido a votación el artículo con la indicación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres, y de los diputados señores Ceroni, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto, Squella y Trisotti, ninguno en contra y ninguna abstención.

**Indicación para incorporar un artículo 2° nuevo**

Los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Monckeberg, don Cristian y Sabag presentaron indicación para incorporar un artículo 2°, **pasando el artículo único a ser Artículo 1°**, del siguiente tenor:

*“g) solicitar ser informada acerca del requerimiento de libertad condicional que presente el imputado, de ser condenado posteriormente a una pena en concreto superior a los cinco años de presidio. De esta manera, ingresada la solicitud a la Comisión de Libertad Condicional respectiva, esta notificará a la víctima que hubiese decidido hacer uso de este derecho en el proceso penal, de forma tal que esta pueda formular por escrito sus observaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes.”*

Sometida a votación se rechazó, por cuatro votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, con el voto en contra de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Rincón, Saldívar, Soto y Squella, y el voto a favor de los diputados señores Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, y Sabag.

**Indicación para incorporar un artículo 10° nuevo**

Los diputados señores Rincón, Saldívar y Soto para incorporar una disposición final del siguiente tenor:

*“Artículo 10.- Derógase el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados. Cualquier referencia legal al mismo, se entenderá hecha al presente texto legal.”*

Sometida la indicación a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto y Squella, ninguno en contra y ninguna abstención.

**Artículo transitorio.-**

Sometido a votación se aprobó por once votos a favor, de la diputada señora Turres y de los diputados señores Ceroni, Coloma, Farcas, Gutiérrez, don Hugo, Monckeberg, don Cristian, Rincón, Sabag, Saldívar, Soto y Squella, ninguno en contra y ninguna abstención.

**IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.**

 Vuestra Comisión no declaró inadmisible ninguna indicación, sin embargo, rechazó las siguientes:

**Indicación al numeral 4 del artículo 2°**

El diputado señor Ceroni presentó indicación al numeral 4° del artículo 2° para eliminar la palabra “favorable”.

**Indicación para incorporar un artículo 2° nuevo**

Los diputados señores Farcas, Fuenzalida, Monckeberg, don Cristian y Sabag presentaron indicación para incorporar un artículo 2°, **pasando el artículo único a ser Artículo 1°**, del siguiente tenor:

*“g) solicitar ser informada acerca del requerimiento de libertad condicional que presente el imputado, de ser condenado posteriormente a una pena en concreto superior a los cinco años de presidio. De esta manera, ingresada la solicitud a la Comisión de Libertad Condicional respectiva, esta notificará a la víctima que hubiese decidido hacer uso de este derecho en el proceso penal, de forma tal que esta pueda formular por escrito sus observaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes.”*

**V.- ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.**

 Vuestra Comisión incorporó las siguientes adiciones y enmiendas:

Epígrafe

*Vuestra Comisión lo ha reemplazado por el siguiente:*

*Artículo único.- Se establece la siguiente Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:*

*“Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad.*

Artículo 2°

Numeral 3°

*Agregó el siguiente párrafo final al numeral 3° del artículo 2°:*

*No se exigirá este requisito para los postulantes cuya condena impuesta, según lo dispuesto en el numeral primero, sea igual o inferior a 540 días.*

**Artículo 3°**

Incisos 3

*Reemplazó el inciso tercero por el siguiente:*

*A las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, si concurren las siguientes circunstancias:*

1. *Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.*
2. *Que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o un particular que actuó en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación del funcionario.*

Inciso 4 nuevo

*Incorporó el siguiente inciso cuarto:*

 *A las personas condenadas por los delitos comprendidos en la ley N° 20.357 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional.”*

Inciso 4 (que pasa a ser 5)

*Intercaló entre las palabras “parricidio” y “homicidio calificado” la palabra “femicidio”, y eliminó la frase “de persona menor de catorce años”. Asimismo, intercaló entre las palabras “policías” y “y de Gendarmería de Chile” la frase “de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile”.*

Inciso 5 (que pasa a ser 6)

*Modificó la referencia que se hace al artículo 6°, haciéndolo al artículo 7°.*

Inciso final nuevo

*Agregó un inciso final nuevo del siguiente tenor:*

*“Con todo, las personas condenadas y privadas de libertad mayores de 75 años, y que padezcan una enfermedad terminal, cumplirán la pena en arresto domiciliario total.”*

**Artículo 4°**

*Intercaló, en su inciso primero, entre las palabras “concederá” y “por resolución” la frase “o rechazará”, y entre las palabras “resolución” y “de una Comisión de Libertad Condicional” la palabra “fundada”.*

Artículo 5°

*Modificó la referencia que se hace, en su inciso final, al artículo 6°, haciéndolo al artículo 7°.*

Artículo 6° nuevo

 *Incorporó un artículo 6° nuevo del siguiente tenor:*

 **“***Artículo 6°.- La persona condenada a quien se le hubiese negado la libertad condicional, podrá reclamar de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que previamente deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica.*

 *La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución administrativa que niega la solicitud de la persona condenada.*

 *El tribunal rechazará de plano el recurso si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el inciso primero.”*

Artículo 8° (que pasa a ser 9°)

*Reemplazó en el artículo 8° la frase “de esta pena” por la frase “del período de ésta.*”

**Artículo 10° nuevo**

*Incorporó una disposición final del siguiente tenor:*

*“Artículo 10.- Derógase el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados. Cualquier referencia legal al mismo, se entenderá hecha al presente texto legal.”*

VI. TEXTO DEL PROYECTO TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Se establece la siguiente Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

“Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad.

 Artículo 1°.- Se establece la libertad condicional como un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, se encuentra en proceso de intervención para la reinserción social.

 La libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en esta ley y en el reglamento respectivo.

 Artículo 2°.- Toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

 1° Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si la persona condenada estuviere privada de libertad cumpliendo dos o más penas, o si durante el cumplimiento de éstas se le impusiere una nueva, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la condena impuesta para estos efectos. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;

 2° Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota “muy buena”, de conformidad al reglamento de esta ley, en los cuatro bimestres anteriores a su postulación. En caso que la condena impuesta no excediere de quinientos cuarenta y un días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los tres bimestres anteriores a su postulación;

 3° Haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

 **No se exigirá este requisito para los postulantes cuya condena impuesta, según lo dispuesto en el numeral primero, sea igual o inferior a 540 días.**

 4° Contar con un informe favorable de reinserción social elaborado por un equipo profesional idóneo del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra la persona condenada, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada.

 Artículo 3°.- Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.

 Las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.

 **A las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, si concurren las siguientes circunstancias:**

1. **Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.**
2. **Que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o un particular que actuó en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación del funcionario.**

 **A las personas condenadas por los delitos comprendidos en la ley N° 20.357 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional.**

 Asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, **femicidio,** homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, y los delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías**, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile** y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

 Las personas condenadas a dos o más penas, cuya suma alcance o supere los cuarenta años de privación de libertad, sólo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido veinte años de reclusión. En caso de concederse, el período de supervisión a que se refiere el artículo 7° se extenderá hasta cumplir cuarenta años contados desde el inicio de la condena.

 Las personas condenadas por los delitos de hurto o estafa a cumplir una pena de más de seis años podrán postular sólo una vez que hayan cumplido tres años de su condena.

 Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, podrán postular a este beneficio sólo una vez que hayan cumplido dos tercios de la condena.

 Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad y, además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido diez años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban, en forma previa, una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

 **Con todo, las personas condenadas y privadas de libertad mayores de 75 años, y que padezcan una enfermedad terminal, cumplirán la pena en arresto domiciliario total.**

 Artículo 4°.- La libertad condicional se concederá **o rechazará** por resolución **fundada** de una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario en el que se encuentre recluida la persona condenada. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, en la forma que determine el reglamento respectivo.

 Cada Comisión de Libertad Condicional estará integrada por:

 a) Un Ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho Ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte.

 b) Cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

 Será Secretario de la Comisión de Libertad Condicional el funcionario que designe la Corte de Apelaciones respectiva.

 Los jueces elegidos serán subrogados, en caso de impedimento o licencia, por los otros jueces con competencia en lo criminal en orden decreciente conforme a la votación obtenida. El empate se resolverá mediante sorteo.

 La Comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los dos meses siguientes a los indicados en el inciso primero.

 Artículo 5°.- La libertad condicional se concederá o rechazará mediante resolución fundada de la Comisión de Libertad Condicional y se revocará del mismo modo.

 La Comisión deberá constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, para lo cual se tendrán a la vista los antecedentes emanados del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario, y todos los demás que la Comisión considere necesarios para mejor resolver.

 Junto con la constatación anterior, para efectos de la concesión o rechazo de la libertad condicional, la Comisión deberá considerar la gravedad del delito por el cual la persona fue condenada y la extensión del mal causado.

 En todo caso, tratándose de personas condenadas a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida, rechazada o revocada por el Pleno de la Corte Suprema, previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo precedente.

 La resolución que conceda, rechace o revoque la libertad condicional en el caso establecido en el inciso precedente se comunicará a la Comisión respectiva, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 7° de la presente ley.

 **Artículo 6°.- La persona condenada a quien se le hubiese negado la libertad condicional, podrá reclamar de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que previamente deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica.**

 **La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución administrativa que niega la solicitud de la persona condenada.**

 **El tribunal rechazará de plano el recurso si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el inciso primero.**

 Artículo **7**°.- Las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de Gendarmería de Chile.

 Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la libertad condicional, la institución deberá elaborar un plan de intervención individual para la persona condenada, de acuerdo a su perfil, el que deberá comprender reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales, la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o intervención especializada. Asimismo, la persona condenada deberá firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de su plan, las que se deberán expresar en el citado documento.

 Artículo **8**°.- Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de cinco días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional.

 En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en esta ley.

 Artículo **9**°.- Las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional, que hubieren cumplido la mitad **del período de ésta** y las condiciones establecidas en su plan de seguimiento e intervención individual, tendrán derecho a que, por medio de una resolución de la respectiva Comisión de Libertad Condicional, se les conceda la libertad completa.

**Artículo 10.- Derógase el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados. Cualquier referencia legal al mismo, se entenderá hecha al presente texto legal.**

 Artículo transitorio.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el reglamento señalado en el artículo 1° en el plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley.

 Hasta la entrada en vigencia de dicho reglamento, se aplicará el decreto supremo N° 2.442, del Ministerio de Justicia, de 1926, que fija el texto del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional, en cuanto sea pertinente.”.

\*\*\*\*

 Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

**PROYECTO DE LEY:**

“Artículo único.- Se establece la siguiente Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

“Ley de Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad.

 Artículo 1°.- Se establece la libertad condicional como un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, se encuentra en proceso de intervención para la reinserción social.

 La libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en esta ley y en el reglamento respectivo.

 Artículo 2°.- Toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

 1° Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si la persona condenada estuviere privada de libertad cumpliendo dos o más penas, o si durante el cumplimiento de éstas se le impusiere una nueva, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la condena impuesta para estos efectos. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;

 2° Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota “muy buena”, de conformidad al reglamento de esta ley, en los cuatro bimestres anteriores a su postulación. En caso que la condena impuesta no excediere de quinientos cuarenta y un días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los tres bimestres anteriores a su postulación;

 3° Haber sido beneficiado y estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

 No se exigirá este requisito para los postulantes cuya condena impuesta, según lo dispuesto en el numeral primero, sea igual o inferior a 540 días.

 4° Contar con un informe favorable de reinserción social elaborado por un equipo profesional idóneo del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra la persona condenada, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada.

 Artículo 3°.- Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.

 Las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.

 A las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, si concurren las siguientes circunstancias:

1. Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
2. Que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o un particular que actuó en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación del funcionario.

 A las personas condenadas por los delitos comprendidos en la ley N° 20.357 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional.

 Asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, y los delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

 Las personas condenadas a dos o más penas, cuya suma alcance o supere los cuarenta años de privación de libertad, sólo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido veinte años de reclusión. En caso de concederse, el período de supervisión a que se refiere el artículo 7° se extenderá hasta cumplir cuarenta años contados desde el inicio de la condena.

 Las personas condenadas por los delitos de hurto o estafa a cumplir una pena de más de seis años podrán postular sólo una vez que hayan cumplido tres años de su condena.

 Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, podrán postular a este beneficio sólo una vez que hayan cumplido dos tercios de la condena.

 Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad y, además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido diez años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban, en forma previa, una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

 Con todo, las personas condenadas y privadas de libertad mayores de 75 años, y que padezcan una enfermedad terminal, cumplirán la pena en arresto domiciliario total.

 Artículo 4°.- La libertad condicional se concederá o rechazará por resolución fundada de una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario en el que se encuentre recluida la persona condenada. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, en la forma que determine el reglamento respectivo.

 Cada Comisión de Libertad Condicional estará integrada por:

 a) Un Ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho Ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte.

 b) Cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

 Será Secretario de la Comisión de Libertad Condicional el funcionario que designe la Corte de Apelaciones respectiva.

 Los jueces elegidos serán subrogados, en caso de impedimento o licencia, por los otros jueces con competencia en lo criminal en orden decreciente conforme a la votación obtenida. El empate se resolverá mediante sorteo.

 La Comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los dos meses siguientes a los indicados en el inciso primero.

 Artículo 5°.- La libertad condicional se concederá o rechazará mediante resolución fundada de la Comisión de Libertad Condicional y se revocará del mismo modo.

 La Comisión deberá constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2°, para lo cual se tendrán a la vista los antecedentes emanados del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario, y todos los demás que la Comisión considere necesarios para mejor resolver.

 Junto con la constatación anterior, para efectos de la concesión o rechazo de la libertad condicional, la Comisión deberá considerar la gravedad del delito por el cual la persona fue condenada y la extensión del mal causado.

 En todo caso, tratándose de personas condenadas a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida, rechazada o revocada por el Pleno de la Corte Suprema, previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo precedente.

 La resolución que conceda, rechace o revoque la libertad condicional en el caso establecido en el inciso precedente se comunicará a la Comisión respectiva, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 7° de la presente ley.

 Artículo 6°.- La persona condenada a quien se le hubiese negado la libertad condicional, podrá reclamar de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que previamente deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica.

 La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución administrativa que niega la solicitud de la persona condenada.

 El tribunal rechazará de plano el recurso si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el inciso primero.

 Artículo 7°.- Las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de Gendarmería de Chile.

 Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la libertad condicional, la institución deberá elaborar un plan de intervención individual para la persona condenada, de acuerdo a su perfil, el que deberá comprender reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales, la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o intervención especializada. Asimismo, la persona condenada deberá firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de su plan, las que se deberán expresar en el citado documento.

 Artículo 8°.- Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de cinco días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional.

 En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en esta ley.

 Artículo 9°.- Las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional, que hubieren cumplido la mitad del período de ésta y las condiciones establecidas en su plan de seguimiento e intervención individual, tendrán derecho a que, por medio de una resolución de la respectiva Comisión de Libertad Condicional, se les conceda la libertad completa.

Artículo 10.- Derógase el decreto ley N° 321, del Ministerio de Justicia, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para los Penados. Cualquier referencia legal al mismo, se entenderá hecha al presente texto legal.

 Artículo transitorio.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el reglamento señalado en el artículo 1° en el plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley.

 Hasta la entrada en vigencia de dicho reglamento, se aplicará el decreto supremo N° 2.442, del Ministerio de Justicia, de 1926, que fija el texto del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional, en cuanto sea pertinente.”.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 Tratado y acordado en sesiones de 16 y 30 de agosto y 6, 12 y 13 de septiembre de 2016, con la asistencia de la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Saldívar, don Raúl; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

 Asistió, además, la diputada señora Camila Vallejo en reemplazo del señor Gutiérrez, don Hugo.

 Sala de la Comisión, a 26 de septiembre de 2016.



**Mario Arturo Rebolledo Coddou**

Secretario (a) de la Comisión

1. Minuta disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=81367&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=80686&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Editorial de El Mercurio “problemas de calidad legislativa”, de 5 de septiembre de 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=83322&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=84306&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>. [↑](#footnote-ref-5)